

INE/CG809/2022

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

DENUNCIANTES: DULCE ARIANA COHUO CHAN Y OTROS

DENUNCIADO: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR DIVERSOS CIUDADANOS EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE VULNERACIÓN A SU DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE SUS DATOS PERSONALES PARA TAL FIN, ASÍ COMO EL REGISTRO COMO REPRESENTANTE DE PARTIDO POLÍTICO ANTE MESA DIRECTIVA DE CASILLA, EN EL CASO DE MARISOL RAMÍREZ GÓMEZ

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós.

G L O S A R I O	
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
<i>DEOE</i>	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral

G L O S A R I O	
UTF	Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
INE	Instituto Nacional Electoral
COFIPE	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
LGSMIME	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
PRD	Partido de la Revolución Democrática
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
Cédula Electrónica	Cédula del Expediente Electrónico de Afiliación, Refrendo Ratificación de la ciudadanía como Militante de un Partido Político

A N T E C E D E N T E S

I. ACUERDO INE/CG33/2019.¹ El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, fue aprobado en sesión extraordinaria del *Consejo General*, el acuerdo por el cual se implementó, de manera excepcional, un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales, en el que se acordó la suspensión de la resolución de diversos procedimientos sancionadores ordinarios, relacionados con presuntas indebidas afiliaciones de ciudadanos de todos los partidos políticos, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

¹Consultable en la liga de internet <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101664/CG1ex201901-23-ap-14.pdf>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

En este sentido, en el Punto de Acuerdo TERCERO del citado Acuerdo, se determinó lo siguiente:

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no hubieran tramitado. **En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.**
[Énfasis añadido]

II. DENUNCIAS. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron en la **UTCE 20 escritos** de queja signados por diversos ciudadanos mediante los cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad electoral, de manera individual, hechos que contravienen la normatividad electoral, consistentes en la presunta violación de su derecho de libertad de afiliación atribuida al **PRD** y la indebida utilización de sus datos personales para tal fin, así como el indebido registro como representante de partido político ante mesa directiva de casilla, en el caso de Marisol Ramírez Gómez.

NO.	NOMBRE DEL QUEJOSO	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE RECEPCIÓN
1	Sandra Luz Iñiguez Cruz ²	Baja California Sur	02/11/2020
2	Lorenzo Velasco López ³	Chiapas	04/11/2020
3	Antonio Cervantes Corona ⁴	Ciudad de México	30/10/2020
4	Jesús Librado Mora Rojas ⁵	Ciudad de México	30/10/2020
5	Laura Lidia Monsalvo Loperena ⁶	Ciudad de México	30/10/2020
6	Lorenzo Ríos Gómez ⁷	Ciudad de México	04/11/2020
7	Yonathan Antolín López Pérez ⁸	Ciudad de México	05/11/2020
8	Mariana Ivonne Vázquez Herrera ⁹	Ciudad de México	05/11/2020
9	Rebeca Alejandra Cosío Estrada ¹⁰	Ciudad de México	05/11/2020
10	Manolo Diego Cantoriano ¹¹	Guerrero	04/11/2020

² Visible a páginas 65 a 73 del expediente.

³ Visible a páginas 116 a 122 del expediente.

⁴ Visible a páginas 84 a 87 del expediente.

⁵ Visible a páginas 88 a 91 del expediente.

⁶ Visible a páginas 92 a 95 del expediente.

⁷ Visible a páginas 96 a 102 del expediente.

⁸ Visible a páginas 12 a 17 del expediente.

⁹ Visible a páginas 18 a 23 del expediente.

¹⁰ Visible a páginas 24 a 29 del expediente.

¹¹ Visible a páginas 125 a 130 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

NO.	NOMBRE DEL QUEJOSO	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE RECEPCIÓN
11	Sara Catalán Landeros ¹²	Guerrero	04/11/2020
12	Marisol Ramírez Gómez ¹³	Guerrero	04/11/2020
13	Rosalba Sánchez Peña ¹⁴	Guerrero	04/11/2020
14	Carlos Arturo de la Paz Manrique ¹⁵	Guerrero	04/11/2020
15	Baltazar Lorenzo Valente ¹⁶	Guerrero	04/11/2020
16	Melina Estrella Sánchez Zárate ¹⁷	Guerrero	04/11/2020
17	Esmeralda Chávez Jaimes ¹⁸	Estado de México	05/11/2020
18	Gloria Andrea Pérez Valdez ¹⁹	Estado de México	02/11/2020
19	Jaime Helios Carbajal Gutiérrez ²⁰	Morelos	05/11/2020
20	Dulce Ariana Cohuo Chan ²¹	Quintana Roo	05/11/2020

III. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y SOLICITUD DE BAJA COMO MILITANTES DE LOS DENUNCIANTES.²² Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidas las denuncias, quedando registradas como **procedimiento sancionador ordinario** identificado con la clave **UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020**.

Asimismo, se admitieron a trámite las denuncias y se reservó lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto se culminara la etapa de investigación.

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se requirió al *PRD* y a la *DEPPP* para que proporcionaran información relacionada con la presunta afiliación de las personas denunciantes.

Aunado a lo anterior, de la revisión de los anexos que acompañaron a sus escritos de denuncia, se advirtió que Marisol Ramírez Gómez y Manolo Diego Cantoriano se encontraban registrados como representantes del *PRD* ante Mesa Directiva de Casilla, por lo que se determinó requerir a dichos denunciantes, para que manifestaran si era su pretensión denunciar su registro como representantes del

¹² Visible a páginas 131 a 136 del expediente.

¹³ Visible a páginas 47 a 52 del expediente.

¹⁴ Visible a páginas 53 a 58 del expediente.

¹⁵ Visible a páginas 59 a 64 del expediente.

¹⁶ Visible a páginas 105 a 109 del expediente.

¹⁷ Visible a páginas 110 a 115 del expediente.

¹⁸ Visible a páginas 30 a 37 del expediente.

¹⁹ Visible a páginas 74 a 81 del expediente.

²⁰ Visible a páginas 38 a 44 del expediente.

²¹ Visible a páginas 01 a 09 del expediente.

²² Visible a páginas 137 a 150 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

PRD ante Mesa Directiva de Casilla, apercibidos que de no atender el requerimiento, la denuncia se seguirá únicamente por la indebida afiliación y uso de sus datos personales.

Dicho proveído fue notificado y desahogado como se muestra a continuación:

Sujeto requerido	Oficio/Correo	Fecha de Respuesta
<i>PRD</i>	INE-UT/03918/2020 ²³ 18/11/2020	Oficio ACAR-283/2020 ²⁴ 23/11/2020 Oficio ACAR-469/2020 ²⁵ 14/12/2020 Oficio ACAR-157/2022 ²⁶ 01/04/2022
<i>DEPPP</i>	Correo electrónico ²⁷ 17/11/2020	Correo electrónico ²⁸ 24/11/2020
Marisol Ramírez Gómez	INE/JDE/VS/0390/2020 ²⁹ 19/11/2020	Escrito ³⁰ 20/11/2020
Manolo Diego Cantorian	INE/JDE/VS/0391/2020 ³¹ 19/11/2020	No contestó

Finalmente, se ordenó al *PRD* que en acatamiento a la obligación que le impone el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*, así como a lo ordenado en el Acuerdo **INE/CG33/2019**, de manera inmediata, procediera a eliminar a los denunciantes de su padrón de militantes, en el caso de que aún se encontraran inscritos, tanto del Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, como de su portal de internet y/o cualquier otra base publica en que pudieran encontrarse.

IV. REQUERIMIENTO A LA *DERFE* E INSTRUMENTACIÓN DE ACTA CIRCUNSTANCIADA.³² Por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se solicitó a la *DERFE* que informara si el *PRD* llevó a cabo el registro de los denunciantes como militantes de su partido mediante la aplicación móvil

²³ Visible a página 162 del expediente.

²⁴ Visible a páginas 228 a 251 del expediente.

²⁵ Visible a páginas 297 a 309 del expediente.

²⁶ Visible a páginas 771 a 798 del expediente.

²⁷ Visible a página 161 del expediente.

²⁸ Visible a páginas 258 a 260 del expediente.

²⁹ Visible a páginas 193 a 195 del expediente.

³⁰ Visible a páginas 196 y 328 del expediente.

³¹ Visible a páginas 190 a 192 del expediente.

³² Visible a páginas 329 a 337 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

denominada “apoyo ciudadano-INE” y, en su caso remitiera los expedientes electrónicos respectivos.

Dicho proveído se desahogó conforme a lo siguiente:

Sujeto requerido	Oficio/Correo	Fecha de Respuesta
DERFE	Correo electrónico 10/02/2021 ³³	Oficio INE/DERFE/STN/2236/2021 ³⁴ 22/03/2021

Además, se ordenó la instrumentación de un acta circunstanciada, a efecto de verificar la baja de los quejosos del padrón de afiliados del *PRD*.

Como resultado de dicha diligencia, se advirtió que, fue imposible acceder a la dirección electrónica proporcionada por el instituto político denunciado para verificar en su padrón de militantes la baja de los quejosos.³⁵

V. VISTA A LOS QUEJOSOS.³⁶ Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a los quejosos con las cédulas aportadas por la *DERFE*.

Dicha diligencia se realizó de la siguiente forma:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Sandra Luz Iñiguez Cruz INE/BCS/JDE01/VS/097/2021 ³⁷	Cédula: 24/05/2021 Plazo: 25 al 27 de mayo de 2021	Sin respuesta
Lorenzo Velasco López INE/05JDE/VS/272/2021 ³⁸	Cédula: 21/05/2021 Plazo: 24 al 26 de mayo de 2021	Por escrito ³⁹ 26/05/2021
Antonio Cervantes Corona INE/02JDE-CM/0792/2021 ⁴⁰	Cédula: 24/05/2021 Plazo: 25 al 27 de mayo de 2021	Sin respuesta
Jesús Librado Mora Rojas	Cédula: 21/05/2021	Sin respuesta

³³ Visible a página 342 del expediente.

³⁴ Visible a páginas 359 a 364 del expediente.

³⁵ Visible a páginas 338 a 340 del expediente.

³⁶ Visible a páginas 365 a 372 del expediente.

³⁷ Visible a páginas 458 a 461 del expediente.

³⁸ Visible a páginas 480 a 485 del expediente.

³⁹ Visible a páginas 436 a 437 del expediente.

⁴⁰ Visible a páginas 463 a 468 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
INE/02JDE-CM/0794/2021 ⁴¹	Plazo: 24 al 26 de mayo de 2021	
Laura Lidia Monsalvo Loperena INE/02JDE-CM/0793/2021 ⁴²	Cédula: 24/05/2021 Plazo: 25 al 27 de mayo de 2021	Sin respuesta
Lorenzo Ríos Gómez INE/JDE 08-CM/00498/2021 ⁴³	Cédula: 20/05/2021 Plazo: 21 al 25 de mayo de 2021	Sin respuesta
Yonathan Antolín López Pérez INE/CM/JDE20/375/2021 ⁴⁴	Cédula: 21/05/2021 Plazo: 24 al 26 de mayo de 2021	Sin respuesta
Mariana Ivonne Vázquez Herrera INE/CM/JDE20/376/2021 ⁴⁵	Cédula: 21/05/2021 Plazo: 24 al 26 de mayo de 2021	Sin respuesta
Rebeca Alejandra Cosío Estrada INE/CM/JDE20/377/2021 ⁴⁶	Estrados 21 de mayo de 2021 Plazo: 24 al 26 de mayo de 2021	Sin respuesta
Manolo Diego Cantoriano INE/JDE/VS/0468/2021 ⁴⁷	Cédula: 20/05/2021 Plazo: 21 al 25 de mayo de 2021	Sin respuesta
Sara Catalán Landeros INE/JDE/VS/0471/2021 ⁴⁸	Cédula: 28/05/2021 Plazo: 31 de mayo al 2 de junio de 2021	Sin respuesta
Marisol Ramírez Gómez INE/JDE/VS/0469/2021 ⁴⁹	Cédula: 20/05/2021 Plazo: 21 al 25 de mayo de 2021	Sin respuesta
Rosalba Sánchez Peña INE/JDE/VS/0470/2021 ⁵⁰	Cédula: 28/05/2021 Plazo: 31 de mayo al 2 de junio de 2021	Sin respuesta
Carlos Arturo de la Paz Manrique INE/JDE/VS/0467/2021 ⁵¹	Cédula: 20/05/2021 Plazo: 21 al 25 de mayo de 2021	Sin respuesta
Baltazar Lorenzo Valente INE/GRO/JD09/00248/2021 ⁵²	Cédula: 21/05/2021 Plazo: 24 al 26 de mayo de 2021	Sin respuesta

⁴¹ Visible a páginas 475 a 477 del expediente.

⁴² Visible a páginas 469 a 474 del expediente.

⁴³ Visible a páginas 399 a 401 del expediente.

⁴⁴ Visible a páginas 425 a 428 del expediente.

⁴⁵ Visible a páginas 429 a 431 del expediente.

⁴⁶ Visible a páginas 432 a 435 del expediente.

⁴⁷ Visible a páginas 408 a 410 del expediente.

⁴⁸ Visible a páginas 503 a 505 del expediente.

⁴⁹ Visible a páginas 411 a 413 del expediente.

⁵⁰ Visible a páginas 506 a 508 del expediente.

⁵¹ Visible a páginas 414 a 416 del expediente.

⁵² Visible a páginas 499 a 501 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Melina Estrella Sánchez Zárate INE/GRO/JD09/00249/2021 ⁵³	Estrados 24 de mayo de 2021 Plazo: 25 al 27 de mayo de 2021	Sin respuesta
Esmeralda Chávez Jaimes INE-JDE07-MEX/VS/0317/2021 ⁵⁴	Cédula: 21/05/2021 Plazo: 24 al 26 de mayo de 2021	Sin respuesta
Gloria Andrea Pérez Valdez INE-JDE29-MEX/VS/227/2021 ⁵⁵	Cédula: 20/05/2021 Plazo: 21 al 25 de mayo de 2021	Sin respuesta
Jaime Helios Carbajal Gutiérrez INE/JD04/0997/2021 ⁵⁶	Cédula: 20/05/2021 Plazo: 21 al 25 de mayo de 2021	Por escrito ⁵⁷ 20/05/2021
Dulce Ariana Cohuo Chan INE/01JDE/VS/0602/2021 ⁵⁸	Cédula: 21/05/2021 Plazo: 24 al 26 de mayo de 2021	Sin respuesta

Aunado a lo anterior, se efectuó un requerimiento a los Vocales Ejecutivo y Secretario de la 07 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Guerrero, para que proporcionaran diversa información relacionada con la acreditación de Marisol Ramírez Gómez como representante ante Mesa Directiva de Casilla o como representante general en aquel Distrito Federal Electoral.

Mediante oficio INE/JD07-GRO/VS/0479/2021⁵⁹, el Vocal Secretario de la Junta Distrital antes mencionada, dio respuesta a lo solicitado por la *UTCE*.

VI. REPOSICIÓN DE NOTIFICACIONES, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE ACTA CIRCUNSTANCIADA⁶⁰. Mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó la reposición de la notificación practicada a las siguientes personas denunciantes:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Yonathan Antolín López Pérez INE/CM/JDE20/0650/2021 ⁶¹	Cédula: 10/08/2021 Plazo: 11 al 13 de agosto de 2021	Sin respuesta

⁵³ Visible a páginas 495 a 498 del expediente.

⁵⁴ Visible a páginas 418 a 423 del expediente.

⁵⁵ Visible a páginas 439 a 442 del expediente.

⁵⁶ Visible a páginas 487 a 493 del expediente.

⁵⁷ Visible a página 494 del expediente.

⁵⁸ Visible a páginas 449 a 455 del expediente.

⁵⁹ Visible a páginas 403 a 407 del expediente.

⁶⁰ Visible a páginas 509 a 520 del expediente.

⁶¹ Visible a páginas 641 y 644 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Mariana Ivonne Vázquez Herrera INE/CM/JDE20/0649/2021 ⁶²	Cédula: 10/08/2021 Plazo: 11 al 13 de agosto de 2021	Sin respuesta
Rebeca Alejandra Cosío Estrada INE/CM/JDE20/0651/2021 ⁶³	Estrados: 10/08/2021 Plazo: 11 al 13 de agosto de 2021	Sin respuesta

Aunado a lo anterior, se ordenó realizar los siguientes requerimientos de información, a efecto de obtener información relacionada con la indebida acreditación de Marisol Ramírez Gómez, como representante ante Mesa Directiva de Casilla.

Dicho proveído fue notificado y desahogado como se muestra a continuación:

Sujeto requerido	Oficio/Correo	Fecha de Respuesta
<i>PRD</i>	INE-UT/08130/2021 ⁶⁴ 06/08/2021	Oficio ACAR-746/2021 ⁶⁵ 10/08/2021
<i>DEOE</i>	INE-UT/08131/2021 ⁶⁶ 06/08/2021	Correo electrónico ⁶⁷ Oficio INE/DEOE/2295/2021 20/08/2021
<i>UTF</i>	Correo electrónico ⁶⁸ 05/08/2021	Oficio INE/UTF/DA/39506/2021 ⁶⁹ 13/08/2021

Aunado a lo anterior, se ordenó la instrumentación de un acta circunstanciada⁷⁰, a efecto de verificar la baja de las personas denunciantes del padrón de afiliados del *PRD*.

Como resultado de dicha verificación se advirtió que, al introducir los datos de las personas denunciantes en el padrón de militantes del partido político de referencia, no se encontró coincidencia con los datos de los mismos.

⁶² Visible a páginas 637 a 640 del expediente.

⁶³ Visible a páginas 651 a 664 del expediente.

⁶⁴ Visible a página 571 del expediente.

⁶⁵ Visible a páginas 585 a 604 del expediente.

⁶⁶ Visible a página 570 del expediente.

⁶⁷ Visible a páginas 680 a 685 del expediente.

⁶⁸ Visible a página 553 del expediente.

⁶⁹ Visible a páginas 645 a 649 del expediente.

⁷⁰ Visible a páginas 521 a 543 del expediente.

No obstante, se detectó que existían dos registros a nombre de los ciudadanos Lorenzo Velasco López y Marisol Ramírez Gómez, cuyos datos no eran coincidentes con los de municipio, en el caso del primero; y con los del municipio y fecha de afiliación, para el caso de la segunda.

Finalmente y en atención a lo señalado en el Anexo 5 del *Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, para el Proceso Electoral 2020-2021* se ordenó notificar al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica de este instituto, así como a los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Distritales Ejecutivas de este instituto correspondientes, respecto del desahogo u omisión de la vista formulada a las y los quejosos.

VII. REQUERIMIENTO AL PRD⁷¹. Mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó requerir al PRD, para que informara si los ciudadanos Lorenzo Velasco López y Marisol Ramírez Gómez que aparecen en las bases de datos del PRD, corresponden a los quejosos materia del presente procedimiento o si se trataba de homonimias.

Dicho proveído fue notificado y desahogado como se muestra a continuación:

Sujeto requerido	Oficio/Correo	Fecha de Respuesta
PRD	INE-UT/08132/2021 ⁷² 06/08/2021	Oficio ACAR-750/2020 (sic) ⁷³ 11/08/2021 Oficio ACAR-855/2021 ⁷⁴ 13/10/2021

VIII. REQUERIMIENTO A LA DEPPP⁷⁵. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó requerir a la DEPPP, para que verificara si los ciudadanos Lorenzo Velasco López y Marisol Ramírez Gómez, que aparece en el padrón de militantes del PRD son homónimos de los ciudadanos materia del presente procedimiento.

Dicho proveído fue notificado y desahogado como se muestra a continuación:

⁷¹ Visible a páginas 545 a 551 del expediente.

⁷² Visible a página 576 del expediente.

⁷³ Visible a páginas 628 a 635 del expediente.

⁷⁴ Visible a páginas 709 a 715 del expediente.

⁷⁵ Visible a páginas 716 a 722 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

Sujeto requerido	Oficio/Correo	Fecha de Respuesta
DEPPP	SAI (Sistema de Archivo Institucional) ⁷⁶ 19/11/2021	Correo electrónico ⁷⁷ 22/11/2021

Además, se ordenó la instrumentación de un acta circunstanciada⁷⁸, a efecto de verificar los vínculos proporcionados por el *PRD*.

IX. VISTA A LORENZO VELASCO LÓPEZ Y MARISOL RAMÍREZ GÓMEZ.⁷⁹

Mediante proveído de doce de enero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a Lorenzo Velasco López y a Marisol Ramírez Gómez, corriéndole traslado con el anexo de la respuesta proporcionada por la *DEPPP*, a efecto de hacer de su conocimiento que existía una homonimia con su nombre en el padrón de afiliados del *PRD*.

X. REQUERIMIENTOS A LA *DERFE*. Mediante proveídos de diecinueve de mayo y cuatro de julio del año en curso, se ordenó requerir a la *DERFE*.

Dichos proveídos fueron notificados y desahogados como se muestra a continuación:

19/05/2022 ⁸⁰		
Sujeto requerido	Oficio/Correo	Fecha de Respuesta
DERFE	SAI (Sistema de Archivo Institucional) ⁸¹ 24/05/2022	Sin respuesta

04/07/2022 ⁸²		
Sujeto requerido	Oficio/Correo	Fecha de Respuesta
DERFE	SAI (Sistema de Archivo Institucional) ⁸³ 06/07/2022	Correo electrónico ⁸⁴ 06/07/2022

⁷⁶ Visible a página 738 a 746 del expediente.

⁷⁷ Visible a página 747 a 749 del expediente.

⁷⁸ Visible a páginas 723 a 736 del expediente.

⁷⁹ Visible a páginas 751 a 755 del expediente.

⁸⁰ Visible a páginas 799 a 806 del expediente.

⁸¹ Visible a página 809 a 820 del expediente.

⁸² Visible a páginas 821 a 828 del expediente.

⁸³ Visible a página 829 a 840 del expediente.

⁸⁴ Visible a página 841 a 846 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

XI. EMPLAZAMIENTO⁸⁵. Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se ordenó emplazar al *PRD*, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, proveído que fue notificado conforme a lo siguiente:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>PRD</i> INE-UT/07511/2022 ⁸⁶	Citatorio: 01/09/2022 Cédula: 02/09/2022 Plazo: 05 al 09 de septiembre de 2022	Oficio ACAR-392/2022 ⁸⁷ 09/09/2022

XII. ALEGATOS⁸⁸. El trece de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Dicha diligencia se realizó de la siguiente manera:

Denunciantes

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Sandra Luz Iñiguez Cruz INE/BCS/JDE01/VS/0106/2022 ⁸⁹	Cédula: 21/09/2022 Plazo: 22 al 28 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Lorenzo Velasco López INE/05JDE/VS/543/2022 ⁹⁰	Cédula: 22/09/2022 Plazo: 23 al 29 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Antonio Cervantes Corona INE/02JDE-CM/1435/2022 ⁹¹	Cédula: 14/09/2022 Plazo: 15 al 22 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Jesús Librado Mora Rojas INE/02JDE-CM/1436/2022 ⁹²	Cédula: 14/09/2022 Plazo: 15 al 22 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Laura Lidia Monsalvo Loperena INE/02JDE-CM/1437/2022 ⁹³	Cédula: 14/09/2022 Plazo: 15 al 22 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Lorenzo Ríos Gómez INE/08JDE-CM/1110/2022 ⁹⁴	Cédula: 14/09/2022	Sin respuesta

⁸⁵ Visible a páginas 847 a 862 del expediente.

⁸⁶ Visible a páginas 864 a 869 del expediente.

⁸⁷ Visible a páginas 872 a 919 del expediente.

⁸⁸ Visible a página 1048 del expediente.

⁸⁹ Visible a página 1048 del expediente.

⁹⁰ Visible a página 1081 del expediente.

⁹¹ Visible a página 982 del expediente.

⁹² Visible a página 985 del expediente.

⁹³ Visible a página 988 del expediente.

⁹⁴ Visible a páginas 957 y 958 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
	Plazo: 15 al 22 de septiembre de 2022	
Yonathan Antolín López Pérez INE/20JDE-CM/0881/2022 ⁹⁵	Citatorio: 14/09/2022 Estrados: 15/09/2022 Plazo: 19 al 23 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Mariana Ivonne Vázquez Herrera INE/20JDE-CM/0882/2022 ⁹⁶	Cédula: 15/09/2022 Plazo: 19 al 23 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Rebeca Alejandra Cosío Estrada INE/20JDE-CM/0883/2022 ⁹⁷	Citatorio: 14/09/2022 Cédula: 15/09/2022 Plazo: 19 al 23 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Manolo Diego Cantoriano INE/JDE07GRO/VS/0856/2022 ⁹⁸	Cédula: 15/09/2022 Plazo: 19 al 23 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Sara Catalán Landeros INE/JDE07GRO/VS/0875/2022 ⁹⁹	Cédula: 23/09/2022 Plazo: 26 al 30 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Marisol Ramírez Gómez INE/JDE07GRO/VS/0853/2022 ¹⁰⁰	Cédula: 14/09/2022 Plazo: 15 al 22 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Rosalba Sánchez Peña INE/JDE07GRO/VS/0854/2022 ¹⁰¹	Cédula: 15/09/2022 Plazo: 19 al 23 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Carlos Arturo de la Paz Manrique INE/JDE07GRO/VS/0855/2022 ¹⁰²	Cédula: 21/09/2022 Plazo: 22 al 28 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Baltazar Lorenzo Valente INE/GRO/JD09/0689/2022 ¹⁰³	Cédula: 14/09/2022 Plazo: 15 al 22 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Melina Estrella Sánchez Zárate INE/GRO/JD09/0690/2022 ¹⁰⁴	Cédula: 14/09/2022 Plazo: 15 al 22 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Esmeralda Chávez Jaimes	Cédula: 14/09/2022 Plazo: 15 al 22 de septiembre de 2022	Sin respuesta

⁹⁵ Visible a página 1008 del expediente.

⁹⁶ Visible a página 991 del expediente.

⁹⁷ Visible a página 997 del expediente.

⁹⁸ Visible a página 1026 del expediente.

⁹⁹ Visible a página 1095 del expediente.

¹⁰⁰ Visible a página 1029 del expediente.

¹⁰¹ Visible a páginas 1032 del expediente.

¹⁰² Visible a página 1083 del expediente.

¹⁰³ Visible a página 1035 del expediente.

¹⁰⁴ Visible a página 1038 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
INE-JDE07-MEX/VS/0566/2022 ¹⁰⁵		
Gloria Andrea Pérez Valdez JDE29-MEX/VE/622/2022 ¹⁰⁶	Estrados: 14/09/2022 Plazo: 15 al 22 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Jaime Helios Carbajal Gutiérrez INE/JD04/1030/2022 ¹⁰⁷	Cédula: 15/09/2022 Plazo: 19 al 23 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Dulce Ariana Cohuo Chan INE-QROO/01JDE/VS/0478/2022 ¹⁰⁸	Cédula: 15/09/2022 Plazo: 19 al 23 de septiembre de 2022	Sin respuesta

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PRD INE-UT/07852/2022 ¹⁰⁹	Citatorio: 13/09/2022 Cédula: 14/09/2022 Plazo: 15 al 22 de septiembre de 2022	ACAR-409/2022 ¹¹⁰ 22/09/2022

XIII. VERIFICACIÓN FINAL DE NO REAFILIACIÓN. El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, personal de la *UTCE*, ingresó al Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos de la *DEPPP*, logrando advertir que la totalidad de personas denunciantes, siguen apareciendo con registro de militancia cancelado, sin que hubiera alguna nueva afiliación.

XIV. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente para someterlo a la consideración de la Comisión de Quejas.

XV. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Tercera Sesión Extraordinaria de carácter privado, celebrada el veintitrés de noviembre de este año, la *Comisión de Quejas* aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes, y

¹⁰⁵ Visible a página 1053 del expediente.

¹⁰⁶ Visible a página 1099 del expediente.

¹⁰⁷ Visible a página 965 del expediente.

¹⁰⁸ Visible a página 975 del expediente.

¹⁰⁹ Visible a página 950 del expediente.

¹¹⁰ Visible a páginas 1058 a 1075 del expediente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), x) e y) de la *LGPP*, con motivo de la probable transgresión al derecho de libertad de afiliación en perjuicio de las personas que han sido señaladas a lo largo de la presente determinación; así como por el posible abuso del ejercicio del derecho constitucional y legal del partido político denunciado, de nombrar a **Marisol Ramírez Gómez** como su representante ante Mesa Directiva de Casilla, así como la utilización de datos personales, por parte del *PRD*, en perjuicio de las referidas personas denunciantes.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones, y en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PRD* derivado, esencialmente, de la transgresión al derecho de libre afiliación, así como por el abuso del derecho constitucional y legal de nombrar representantes ante mesa directiva de casilla, sin su consentimiento y, en su caso, la utilización indebida de datos personales.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹¹¹ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de personas a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por transgresión a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por transgresión a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE*, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

¹¹¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO.

Para la resolución del presente asunto se debe subrayar que, para el caso de Yonathan Antolín López Pérez, la presunta violación a su derecho de libre afiliación se cometió durante la vigencia del *COFIPE*, pues el registro o afiliación de dicho quejoso al referido instituto político, de acuerdo con lo informado por la *DEPPP*, se realizó el:

Quejoso	Fecha de afiliación
Yonathan Antolín López Pérez	10/03/2014

Por tanto, si al momento de la comisión de la presunta falta se encontraba vigente el *COFIPE*, es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento en dicho caso, al margen que la falta pudiera haber sido advertida por el denunciante mediante la queja que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*.

Ahora bien, para el caso de Sandra Luz Iñiguez Cruz, Lorenzo Velasco López, Antonio Cervantes Corona, Jesús Librado Mora Rojas, Laura Lidia Monsalvo Loperena, Lorenzo Ríos Gómez, Mariana Ivonne Vázquez Herrera, Rebeca Alejandra Cosío Estrada, Manolo Diego Cantoriano, Sara Catalán Landeros, Marisol Ramírez Gómez, Rosalba Sánchez Peña, Carlos Arturo de la Paz Manrique, Baltazar Lorenzo Valente, Melina Estrella Sánchez Zárate, Esmeralda Chávez Jaimes, Gloria Andrea Pérez Valdez, Jaime Helios Carbajal Gutiérrez y Dulce Ariana Cohuo Chan, ciudadanos que, de conformidad con la información proporcionada por la *DEPPP*, fueron afiliados con posterioridad a la entrada en vigor de la *LGIPE*, como se advierte a continuación:

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

Quejoso (a)	Fecha de afiliación
Sandra Luz Iñiguez Cruz	18/07/2019
Lorenzo Velasco López	04/07/2019
Antonio Cervantes Corona	21/05/2019
Jesús Librado Mora Rojas	21/05/2019
Laura Lidia Monsalvo Loperena	31/05/2019
Lorenzo Ríos Gómez	21/05/2019
Mariana Ivonne Vázquez Herrera	02/07/2019
Rebeca Alejandra Cosío Estrada	31/05/2019
Manolo Diego Cantoriano	23/05/2019
Sara Catalán Landeros	18/07/2019
Marisol Ramírez Gómez	25/06/2019
Rosalba Sánchez Peña	16/07/2019
Carlos Arturo de la Paz Manrique	27/06/2019
Baltazar Lorenzo Valente	23/05/2019
Melina Estrella Sánchez Zárate	06/08/2019
Esmeralda Chávez Jaimes	16/07/2019
Gloria Andrea Pérez Valdéz	20/08/2019
Jaime Helios Carbajal Gutiérrez	17/05/2019
Dulce Ariana Cohuo Chan	23/07/2019

Para dichos casos será aplicable la referida *LGIPE*, finalmente, será la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas* la normativa aplicable para cuestiones procesales y/o adjetivas.

TERCERO. EFECTOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL INE/CG33/2019.

Para los efectos de la resolución del asunto que nos ocupa, y con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General* aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, por el que se implementó un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo fueron las siguientes:

- 1) La imposición de sanciones económicas que se venían aplicando a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política fue insuficiente para inhibir esta conducta.
- 2) Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliados, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.
- 3) La revisión que el *INE* hizo a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió a verificar su número mínimo de afiliadas y afiliados para la conservación de su registro y a vigilar que no existiese doble afiliación, a partidos políticos con registro o en formación.
- 4) Dicha verificación no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encontraran inscritas las personas que de manera libre y voluntaria hubieran solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se contara con alguno de los documentos que avalaran su decisión.

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, con las excepciones siguientes:

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,

- Porque se encontraran en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y cuyo incumplimiento tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

En este sentido, debe destacarse que, durante la vigencia del referido acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de todas y cada una de las personas denunciadas en los procedimientos, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, como de sus portales de internet y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de 9 millones de personas.

Cabe señalar, que los padrones de afiliadas y afiliados son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

En ese sentido, de conformidad con los elementos con que cuenta este *Consejo General* al momento de resolver el presente asunto, es válido concluir que la revisión y seguimiento en el desahogo de las etapas supervisadas de manera particular y puntual por esta autoridad, así como la actitud activa de los partidos políticos en el desarrollo de sus actividades y obligaciones, permitió alcanzar el propósito perseguido con el acuerdo INE/CG33/2019, esto es, atender la problemática de raíz hasta entonces advertida y depurar los padrones de afiliados de los partidos políticos, garantizando con ello el ejercicio del derecho de libertad de afiliación en beneficio de la ciudadanía.

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO

1. EXCEPCIONES Y DEFENSAS

Dentro de la etapa de emplazamiento y durante la etapa de alegatos el *PRD*, por conducto de su representante ante el *Consejo General*, manifestó, lo siguiente:

1. Es totalmente falso que ese instituto político hubiera llevado a cabo la indebida afiliación y uso indebido de datos personales de las personas denunciantes, ya que siempre se han conducido bajo los causes establecidos en la normativa electoral para llevar a cabo la debida afiliación de sus militantes.
2. Refiere que han cumplido con la normativa constitucional sin llevar a cabo indebidas afiliaciones y no han hecho uso indebido de los datos personales de los ciudadanos, tal y como se acredita con la respectiva cédula de afiliación [expediente electrónico].
3. Precisa que de los 20 expedientes electrónicos remitidos por la *DERFE* 13 de ellos tienen similitud y rasgos iguales en su contenido, conforme a lo establecido en los lineamientos y el convenio celebrado, y el anexo técnico, entre esta autoridad y ese instituto político, con lo que se acredita que la captación de los datos hechos por el auxiliar y de la verificación de los mismos realizada en mesa de control dan certeza de la validación de las afiliaciones de los ciudadanos.
4. Refiere que de los 20 ciudadanos a los que se les dio vista, 18 no dieron respuesta, por lo que se debe tener por precluido su derecho de manifestarse y que los dos restantes se debe considerar procedente la afiliación ya que, si bien refirieron desconocer la firma, no confrontan de manera directa el contenido de la firma plasmada en el expediente electrónico, por lo que deben considerarse improcedentes dichas alegaciones.
5. Respecto del ciudadano Manolo Diego Cantoriano, debe considerarse procedente la afiliación, ya que, si bien el expediente electrónico no cuenta con la firma digitalizada, se cuenta con la foto viva. Aunado a que el quejoso fue omiso en dar respuesta a la vista que le fue formulada, por lo que precluyó su derecho, por lo que, al no haber realizado manifestaciones por la falta de firma, debe considerarse consentido el acto.
Refiere que si bien existe una inconsistencia con el expediente electrónico debe considerarse como válido, ya que dicho elemento ya había sido validado por la *DERFE*.
6. Refiere que la validez de la inconsistencia de la falta de firma digitalizada es consecuencia de un error insuperable -humano- como lo señala la *DERFE* es decir que dicho error fue por posibles situaciones presentadas en la captación

- de los datos por las funcionalidades alternas del dispositivo móvil con el que fue captado el elemento -firma digitalizada- y de la verificación realizada en mesa de control, quedando fuera del alcance del auxiliar y de ese instituto político.
7. Señala que ese instituto político no tenía la forma de justificar el registro de Marisol Ramírez Gómez, debido a los daños causados en el inmueble del *PRD* por lo que no cuenta con las documentales del nombramiento de registro como representante del partido ante Mesa Directiva de Casilla.
 8. Refiere que no obstante lo anterior, debe considerarse viable la acreditación de participación de la ciudadana en atención al “acta de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al consejo distrital” en la que aparece el nombre y firma de la quejosa.
 9. Señala que si la fecha de afiliación que aparece en el expediente electrónico es distinta a 2014 es porque el ciudadano solicitó se respetara su derecho de antigüedad.

Ahora bien, por cuestión de método y debido a que las excepciones y defensas guardan estrecha vinculación con el análisis necesario para dilucidar la controversia, se atenderán en el fondo del presente asunto.

2.- FIJACIÓN DE LA MATERIA DEL PROCEDIMIENTO

La materia en el presente procedimiento, se constriñe en determinar si el *PRD* transgredió el derecho de libertad de afiliación de **Sandra Luz Iñíguez Cruz, Lorenzo Velasco López, Antonio Cervantes Corona, Jesús Librado Mora Rojas, Laura Lidia Monsalvo Loperena, Lorenzo Ríos Gómez, Yonathan Antolín López Pérez, Mariana Ivonne Vázquez Herrera, Rebeca Alejandra Cosío Estrada, Manolo Diego Cantoriano, Sara Catalán Landeros, Marisol Ramírez Gómez, Rosalba Sánchez Peña, Carlos Arturo de la Paz Manrique, Baltazar Lorenzo Valente, Melina Estrella Sánchez Zárate, Esmeralda Chávez Jaimes, Gloria Andrea Pérez Valdez, Jaime Helios Carbajal Gutiérrez y Dulce Ariana Cohuo Chan**, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2; 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

En el caso particular de **Marisol Ramírez Gómez**, además, el indebido registro como representante propietaria ante Mesa Directiva de Casilla, por parte de dicho

instituto político, sin su consentimiento, utilizando para ello, indebidamente sus datos personales, en contravención a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, párrafo tercero, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 259,397 y 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIE*; 2, párrafo 1, inciso b), 23, párrafo 1, inciso j) y 25, párrafo 1, incisos a), x) e y), de la *LGPP* en relación con el *ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL MODELO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL REGISTRO DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, GENERALES Y ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017 – 2018, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE DERIVEN DEL MISMO.*

3.- MARCO NORMATIVO RELATIVO A LA LIBERTAD DE AFILIACIÓN.

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. *Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;*

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*.

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.¹¹²

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial

¹¹² Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹¹³ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de

¹¹³ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes — asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. *Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como partido político nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como partido político nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o distritos electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1.
- Que los estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los partidos políticos nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les

correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIPE*, que es obligación de los partidos políticos nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del entonces *Instituto Federal Electoral* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o distritos electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los partidos políticos nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los partidos políticos nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los partidos políticos nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de

responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con lo necesario para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PRD

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que una persona debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del PRD, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:¹¹⁴

Artículo 13. *Serán personas afiliadas al Partido, las mexicanas o mexicanos, que reúnan los requisitos establecidos en este Estatuto, con pretensión de colaborar de manera activa en la organización y funcionamiento del Partido, contando con las obligaciones y derechos observados en el presente ordenamiento*

Artículo 14. *Para ser considerada una persona afiliada al Partido deberán cubrirse los siguientes requisitos:*

- a) Ser mexicana o mexicano;*
- b) Contar con credencial para votar vigente, emitida por el Registro Federal de Electores del órgano electoral constitucional; y*
- c) Solicitar de manera personal, individual, libre, pacífica y sin presión de ningún tipo su inscripción al Padrón de Personas Afiliadas al Partido, conforme al Reglamento respectivo.*

Para tal efecto, cualquier persona que pretenda afiliarse al Partido lo podrá realizar mediante los siguientes procedimientos:

- 1. Solicitando de manera personal su afiliación en los módulos que para tal efecto instale el órgano de Afiliación debiendo proporcionar los datos que para esto le sean solicitados; o*
- 2. Solicitando mediante internet en el sistema institucional del órgano de Afiliación, debiendo proporcionar los datos que le sean solicitados y ratificar presencialmente su voluntad. De no concluir el procedimiento previsto en el párrafo anterior, se deberá de iniciar nuevamente la solicitud con el registro.*

REGLAMENTO DE AFILIACIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA¹¹⁵

Artículo 19. *Toda persona que desee afiliarse al Partido deberá:*

- a) Solicitar de manera personal en los módulos que para tal efecto instale el Órgano de Afiliación en coadyuvancia con las Direcciones Estatales y Municipales.*
- b) Solicitarlo mediante internet en el Sistema Institucional del Órgano de Afiliación.*

¹¹⁴ <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133568/CGex202204-27-rp-2-3-a3.pdf>

¹¹⁵ <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/03/deppp-reglamento-afiliacion-prd.pdf>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

En el caso de afiliación por internet la persona interesada deberá ingresar a la página del Órgano de Afiliación para seguir los pasos indicados y proporcionar la información señalada en el artículo 21 del presente reglamento.

Artículo 20. Al concluir el procedimiento de registro de la persona interesada, el sistema generará una cédula electrónica con los datos y biométricos que ésta proporcionó, dicha cédula será considerada como la documental que acredita su calidad de persona afiliada al Partido.

Artículo 21. El solicitante proporcionará los datos de su credencial para votar vigente, que a continuación se enlistan a efecto de que se registren en la solicitud de afiliación

- a) Nombre completo;*
- b) Domicilio, Estado, Municipio o Alcaldía;*
- c) Clave de Elector, OCR y sección electoral;*
- d) Huella dactilar;*
- e) Fecha de nacimiento; y*
- f) Género.*

Además, de manera voluntaria para fines estadísticos y de organización partidaria, podrán proporcionar la siguiente información:

- a) Ocupación;*
- b) Escolaridad;*
- c) Número telefónico;*
- d) Correo electrónico; y*
- e) Redes sociales.*

La solicitud deberá incluir la manifestación expresa de:

- a) El compromiso de aceptar y cumplir en todo momento los lineamientos establecidos tanto en la Declaración de Principios, Programa, Línea Política, el Estatuto y los Reglamentos que de éste emanen; acatar como válidas todas y cada una de las resoluciones tomadas al interior del Partido;*
- b) Declaración bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados son ciertos;*
- c) En caso de que así lo deseen, consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales y el traslado de estos a las autoridades intrapartidarias, electorales y jurisdiccionales en el ámbito que corresponda; y*
- d) Las demás que le confiera el Estatuto y la reglamentación aplicable.*

D) Acuerdo INE/CG33/2019

Ahora bien, resulta importante precisar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos asumió el órgano máximo de dirección del *INE*, al emitir el Acuerdo registrado con la clave INE/CG33/2019, por el cual se aprobó *“la implementación de manera excepcional*

de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales” ello derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el procedimiento al rubro indicado.

CONSIDERANDO

...

10. Justificación del Acuerdo.

...

Con la información anterior, tenemos que derivado de la publicación de los padrones de afiliadas y afiliados a los partidos políticos, desde 2014 a la fecha, el INE ha recibido diversas quejas presentadas por la ciudadanía por indebida afiliación en todos y cada uno de los PPN, toda vez que las personas ciudadanas pueden revisar si están o no afiliadas a algún partido político y puede darse el caso de ciudadanas y ciudadanos que, por algún interés particular, se vean afectados al encontrarse registrados como militantes de estos, tal es el caso de las personas interesadas para ser contratadas como Capacitadores Asistentes Electorales o cuando se convoca para ser designados como Consejeras y Consejeros de los Consejos Locales y Distritales del INE, o para integrar los OPLE.

Así, se puede evidenciar que, en distintos periodos, todos y cada uno de los partidos políticos que han tenido registro a nivel nacional, han sido sancionados por indebidas afiliaciones.

Ello evidencia que los padrones de militantes de los PPN no están lo suficientemente actualizados ni sistematizados con la documentación que acredite la afiliación. Lo cual genera que resulten fundados los casos de indebidas afiliaciones, debido a que los partidos políticos no acreditan en forma fehaciente que las y los ciudadanos efectivamente se afiliaron a determinado partido, o bien, porque los partidos políticos no tramitan las renunciaciones que presentan sus afiliadas y afiliados y, por tanto, no los excluyen del padrón de militantes.

Ahora bien, esta autoridad considera que la imposición de sanciones económicas ha sido insuficiente para inhibir la indebida afiliación de personas a los PPN, ya que ésta continúa presentándose. Incluso, los propios PPN reconocen que es necesario iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación ya que la falta de documentos se debe a diversas circunstancias; es decir, el hecho de que el INE sancione a los PPN no ha servido para solucionar el problema de fondo, que consiste en la falta de rigor en los procedimientos de afiliación y administración de los padrones de militantes de todos los PPN, en tanto que la mayoría de ellos no cuentan con las respectivas cédulas de afiliación.

...

Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre

*afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, **se estima necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.***

Con ello, no sólo se protegen y garantizan los derechos político electorales de las personas, sino se fortalece el sistema de partidos, el cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

...

A C U E R D O

PRIMERO. Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.

SEGUNDO. Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto.

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

CUARTO. Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada.

QUINTO. Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado.

[Énfasis añadido]

E) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

...
los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer

...

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PRD* podrán afiliarse las y los ciudadanos mexicanos que de manera personal, individual, libre, pacífica y sin presión de ningún tipo soliciten su inscripción al Padrón de Personas Afiliadas del Partido.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- Ante la problemática advertida por esta autoridad electoral nacional, respecto de la falta de actualización y depuración de la documentación soporte que avalen las afiliaciones ciudadanas a los partidos políticos, este Consejo General, emitió el Acuerdo INE/CG33/2019, por el cual instauró, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación.

4.- MARCO NORMATIVO RELATIVO A LA ACREDITACIÓN COMO REPRESENTANTE ANTE MESA DIRECTIVA DE CASILLA.

Ahora bien, a efecto de determinar lo conducente respecto de la presunta acreditación de Marisol Ramírez Gómez como representante ante mesa directiva de casilla durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, es necesario tener presente la legislación que regula el derecho de la ciudadanía a una participación política libre e informada, el procedimiento del derecho a registrar a representantes ante mesas directivas de casilla y representantes generales por parte de los partidos políticos, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares, vigentes al momento de la comisión de la supuesta infracción.

A) Derecho ciudadano a una participación política libre e individual

Los artículos 1 y 35, de la Constitución establecen, respectivamente, la titularidad de los derechos humanos en beneficio de todas las personas y la libertad de

asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país.

Por otro lado, en el artículo 23, de la *LGPP*, se reconoce el derecho de los partidos políticos de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, así como de nombrar representantes ante los órganos del *INE* o de los Organismos Públicos Locales; asimismo en el artículo 25, primer párrafo, inciso a), del mismo ordenamiento, se prevé la obligación de los partidos políticos de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

En ese sentido, el derecho de los partidos políticos de participar en la preparación y desarrollo de los procesos electorales y de nombrar representantes, encuentra límites en el derecho de la ciudadanía de participar libremente en los asuntos políticos del país, pues deben conducirse dentro de los cauces legales respetando los derechos de terceros, de ahí que la comisión de alguna conducta que implique la inobservancia a dichos límites implica una vulneración al orden constitucional.

En efecto, las y los ciudadanos mexicanos tienen en todo momento el derecho a participar libre y activamente en los asuntos políticos del país, siendo una de las vías idóneas los partidos políticos, a través del derecho de asociación y de afiliación, sin embargo, esos derechos se traducen, desde una vertiente negativa, también a no ser asociados o vinculados con éstos sin su consentimiento, toda vez que representan ideologías y principios con los cuales no necesariamente los ciudadanos comulgan o se identifican.

De ahí que, el derecho ciudadano de participación política de asociación y afiliación implica, también, el derecho a no ser vinculado o relacionado con un partido sin el consentimiento expreso de su titular, en tanto que una vinculación con un partido político, de la forma en que se presente, sugiere o pudiera interpretarse que existe cierta simpatía o militancia a ese instituto político, aun cuando la ciudadana o ciudadano no hayan manifestado en modo alguno su preferencia por éste, o bien expresado su consentimiento para que se le vincule con el mismo.

Así, la necesidad de que exista un consentimiento expreso de las y los ciudadanos para que su nombre y datos personales sean vinculados con alguna fuerza política, subyace del derecho a la imagen y de asociación política cuyo núcleo esencial se encuentra protegido en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales.

En efecto, en el primer párrafo del artículo 6 constitucional, se establece que la libre expresión de ideas encuentra su límite en la vida privada y los derechos de terceros. Asimismo, en el apartado A, fracción II, se prevé que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones previstas en la legislación secundaria.

En igual sentido, en el artículo 11, párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte que nadie puede ser objeto de ataques ilegales en su imagen, honra y reputación.

De lo anterior se desprende que la imagen es un valor universal construido con base en la opinión, percepción o buena fama de los ciudadanos, de ahí que la percepción que cada persona desea construir en torno a ello se basa en las preferencias o consideraciones de la propia persona, de ahí que los partidos políticos no pueden, sin que exista consentimiento expreso del ciudadano, utilizar su nombre e imagen para sus propios fines.

En ese orden de ideas, en el artículo 41, base I, párrafo primero de la *Constitución*, se establece el derecho de las y los ciudadanos de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, por otra parte, en el artículo 16, párrafo 1, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 22, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se prevé el derecho de asociación política.

Sobre esto mismo, la *Sala Superior*¹¹⁶ ha establecido que el derecho de afiliación faculta a su titular para:

1. Afiliarse a una determinada opción política.
- 2. No afiliarse a ninguna opción política.**
3. Conservar o incluso, ratificar su afiliación.
4. Desafiliarse a una determinada opción política.

Sobre esta base, la Sala Regional Especial Especializada del *Tribunal Electoral* ha dispuesto¹¹⁷ que *el núcleo básico de dicha prerrogativa fundamental se refiere justamente a la libertad que tiene una persona de decidir si se vincula con alguna*

¹¹⁶ SUP-RAP-324/2009 y jurisprudencia 24/2002, de rubro: **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.**

¹¹⁷ Dicho criterio fue adoptado por la Sala Regional Especializada del *Tribunal Electoral* en los medios de impugnación identificados con las claves SRE-PSC-94/2015 y SRE-PSC-45/2016, éste último confirmado por la Sala Superior el SUP-REP-96/2016 y acumulado.

fuerza política o, por el contrario, se abstiene o niega a establecer algún tipo de relación de esa índole.

Asimismo, dicho órgano jurisdiccional sostuvo que, *si la base fundamental que sustenta el derecho de afiliación radica justamente en que el ciudadano debe tener la voluntad propia y libre de vincularse con determinado partido político, **resulta factible estimar que un individuo se ve afectado en dicho derecho cuando, sin que medie consentimiento, se le relaciona con una determinada fuerza política y, más aún cuando tal vinculación se efectúa en forma pública.***

Esto es, si el derecho de afiliación impide de suyo que al ciudadano se le obligue en algún modo a pertenecer a determinada fuerza política, con mayor razón, se encuentra prohibido que la vinculación con una opción política se haga en forma pública y en contra de la voluntad del ciudadano.

B) Derecho de los partidos políticos a registrar a representantes ante mesas directivas de casilla o representantes generales.

La *LGIPE* prevé como parte de los derechos de los partidos políticos, registrar representantes ante las mesas directivas de casilla, con la finalidad de que puedan observar todo el procedimiento de votación, como salvaguarda necesaria para la integridad y transparencia de la elección.

En efecto, en el artículo 259 de la *LGIPE*, se establece lo siguiente:

- 1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta trece días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios...*
- ...*
- 3. Los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casilla y generales, podrán firmar sus nombramientos hasta antes de acreditarse en la casilla...*

A su vez, en el artículo 262, párrafo 1, de la Ley en cita, se establece que el registro de los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla y de los representantes generales se hará ante el Consejo Distrital correspondiente, así mismo, determina las reglas a las que deberá sujetarse.

En el artículo 264, párrafo 1, de la *LGIPE*, se prevé que los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla deberán contener los siguientes datos:

- a)** Denominación del partido político o nombre completo del candidato independiente;
- b)** Nombre del representante;
- c)** Indicación de su carácter de propietario o suplente;
- d)** Número del Distrito electoral, sección y casilla en que actuarán;
- e)** Clave de la credencial para votar;
- f)** Lugar y fecha de expedición; y
- g)** Firma del representante o del dirigente que haga el nombramiento.

En este tenor, el dispositivo 265, párrafo 1, del referido ordenamiento legal, establece que los nombramientos de los representantes generales deberán contener los mismos datos que los nombramientos de los representantes ante las mesas directivas de casilla, con excepción del número de casilla.

Por su parte los acuerdos aprobados por este Consejo General relativos a dicho procedimiento, vigentes al momento de la posible falta, son los siguientes:

- Acuerdo INE/CG150/2018, en el que se aprobó *EL MODELO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL REGISTRO DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, GENERALES Y ANTE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE DERIVEN DEL MISMO*

En dicho acuerdo, se estableció, entre otras cosas, lo siguiente:

- 1) El registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla, por parte de los partidos políticos y candidatos independientes, en cualquier procesos, federal o local, se llevaría a cabo por el *Instituto*.
- 2) El *Instituto* entregaría los modelos de formato de solicitud para el registro de los representantes ante las mesas directivas de casilla y generales.
- 3) El *Instituto*, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral proporcionaría acceso a un sistema informático que automatizaría y facilitaría el llenado y generación de los formatos.

Asimismo, el *MODELO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA PARA EL REGISTRO DE REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y*

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE DERIVEN DEL MISMO, estableció las fechas respecto de las actividades vinculadas al modelo de operación:

Actividad	Fecha/Periodo
Entrega de cuentas de acceso a partidos políticos y candidatos independientes nacionales, así como a partidos políticos en el ámbito local.	Fecha límite 06 de abril
Entrega de cuentas de acceso a candidatos independientes en el ámbito local.	Fecha límite 22 de abril
Preparación para el simulacro (pruebas de acceso).	23-25 de abril
Simulacro.	26 de abril
Inicio de registro/sustitución de representantes (registro individual y/o carga por lote).	16 de mayo
Límite para carga por lote.	18 de junio
Límite para sustituciones por lote.	18 de junio
Límite para registro individual.	18 de junio
Límite para sustituciones individuales.	21 de junio
Fecha para asentar firma digitalizada y sellos digitales en los nombramientos.	22-23 de junio
Fecha a partir de la que se pueden realizar consultas y, en su caso, descarga e impresión de nombramientos con firma digitalizada y sellos digitales.	24 de junio

- Acuerdo **INE/CG167/2018**, por el que se aprobaron los *LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS A LOS QUE DEBERÁN APEGARSE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS O GRATUIDAD DE LOS REPRESENTANTES GENERALES Y REPRESENTANTES ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018*.

En dicho Acuerdo, se estableció, en lo que interesa, lo siguiente:

- 1) Es obligación de los partidos políticos el reportar e informar, para efectos de fiscalización, la actividad de sus representantes a través del formato Comprobación de Representantes Generales y de Casilla.
- 2) En este tenor, los actores políticos informarían a través de los formatos correspondientes la modalidad del servicio prestado por sus representantes, por lo que, en el caso de gratuidad de los servicios, estos debían ser reportados a

través del Subsistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, Generales y ante Mesa Directiva de Casilla y en caso de que se tratara de servicios onerosos, a través del Sistema Integral de Fiscalización.

3) Por ello que en el Subsistema de Registro de Representantes se generaría por cada representante, un formato que contendría:

- Nombre completo;
- Clave de elector;
- Partido político o candidato independiente al que representan;
- Código QR que permitirá su pronta identificación; y
- En su caso, la leyenda que señale de forma expresa que realizó sus actividades de forma gratuita y desinteresada.

C) Protección de datos personales

1) *Constitución Política*, tratados Internacionales y criterios jurisdiccionales.

El derecho humano a la vida privada o a la intimidad, se tutela de manera general en los artículos 6 y 16, de la *Constitución* y en los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado el Estado mexicano, de conformidad con los artículos 1º y 133 de nuestra Carta Magna.

En ese sentido, los artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la vida privada de las personas, conforme al cual, deben reservarse sus datos personales y la demás información relativa a su vida privada que estén en poder de algún ente público o de particulares, y protegerse de la posible utilización indebida por terceros.

A su vez, el artículo 6, base A, fracción II, de la *Constitución* establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.¹¹⁸

El artículo 16 constitucional, en sus dos primeros párrafos, dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa

¹¹⁸ La reforma al artículo 6to constitucional en la que se previó la protección de datos personales data del veinte de julio de dos mil siete.

legal del procedimiento; y que **toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley**, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

En ese sentido, con la reforma al artículo 16 constitucional¹¹⁹ se hace referencia a la existencia de principios a los que se debe sujetar todo tratamiento de datos personales, así como los supuestos en los que excepcionalmente dejarían de aplicarse dichos principios. Dentro de los más importantes podemos señalar los de licitud, proporcionalidad, calidad seguridad y finalidad.

Licitud: el tratamiento de datos personales deberá obedecer exclusivamente a las facultades, atribuciones o competencias que la normativa aplicable les confiere.

Proporcionalidad: sólo se deberán tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.

Calidad: implica, entre otras cuestiones, que los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán atender a las disposiciones aplicables a la materia de que se trate.

Seguridad: se deberán establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción, o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Finalidad: los datos personales en posesión de los responsables deberán tratarse únicamente para la o las finalidades para las cuales fueron obtenidos. Dichas finalidades deberán ser concretas, lícitas, explícitas y legítimas.

¹¹⁹ El artículo 16 constitucional fue reformado en la materia el primero de julio de dos mil nueve.

Además de los principios anteriormente enlistados, existen principios internacionales complementarios en materia de protección de datos que es pertinente tener presentes a la hora de resolver el presente procedimiento.

Límite de uso: consiste en no divulgar los datos personales o aquellos utilizados para propósitos distintos para los que fueron recabados.

Protección a la seguridad: consiste en proteger los datos personales e información, mediante mecanismos razonables de seguridad en contra de riesgos, como pérdida, acceso no autorizado, destrucción, utilización, modificación o divulgación de datos.

Responsabilidad: consiste en la responsabilidad del controlador de datos de cumplir efectivamente con medidas suficientes para implementar los principios anteriormente enunciados.

Como se advierte, el derecho a la intimidad está relacionado con una adecuada normativa en materia de protección de datos personales al tratarse estos de derechos fundamentales cuya vulneración podría poner en riesgo incluso a la persona misma.

La afirmación anterior tiene sustento en razón de que el conjunto de datos personales puede generar no sólo la identificación de la persona a la cual pertenecen, sino la posibilidad de inferir a partir de ellos, datos sensibles de las personas como lo son religión, raza o grupo étnico, estado de salud, situación financiera, etcétera, lo que podría poner en riesgo al sujeto tutelado.

Así, el siete de febrero de dos mil catorce, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 6 de la *Constitución*, la cual fija las bases para la creación de una ley general de protección de datos personales.

En otro orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el Amparo directo en revisión 2420/2011, entre otras cuestiones, que **ese consentimiento debe otorgarse de manera expresa, por tanto, la autoridad deberá objetivarlo por escrito o mediante cualquier otro procedimiento que facilite su prueba y denote un consentimiento claro e indudable.**

Asimismo, la Suprema Corte en el diverso amparo directo en revisión 1656/2011 y en la contradicción de tesis 38/2012, determinó que el derecho al respeto de la vida privada deriva de la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad principal es el

reconocimiento a un ámbito de vida privada personal y familiar que, por regla general, debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás. Tal derecho puede extenderse a una protección que va más allá del domicilio, como espacio físico en que normalmente se desenvuelve la vida privada, puesto que puede abarcar papeles, posesiones, datos personales del gobernado.

Bajo dicha lógica, la Suprema Corte ha establecido que los rasgos característicos de la noción de lo “privado” se relacionan con: a) lo que no constituye vida pública; b) el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; c) lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; d) las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; y, e) aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos.

En cuanto a la vida privada, en un ámbito más amplio y derivado del desarrollo tecnológico, se advierte que se pueden vulnerar otros aspectos de la esfera de la persona, tal como sus datos personales.

Ahora bien, en cuanto al derecho a la intimidad, la Suprema Corte ha determinado en los criterios apuntados, que este se asocia con la existencia de un ámbito privado que se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, y tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y conocimiento de terceros, ya sea por parte de particulares o por los poderes del Estado.

Tal derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado por el individuo para sí y su familia; asimismo, garantiza el derecho a la intimidad a efecto de disponer del control sobre la publicidad de la información tanto de la persona como de su familia; lo que se traduce en el derecho de la autodeterminación de la información que supone la posibilidad de elegir qué información de la esfera privada de la persona puede ser conocida, y cuál debe permanecer en secreto, **así como designar quién y bajo qué condiciones puede utilizar esa información.**

En este orden de ideas, la normativa en la materia define los *datos personales*¹²⁰ como la información concerniente a una persona física identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o

¹²⁰ Artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente al momento en que acontecieron los hechos denunciados.

filosóficas, el estado de salud físico o mental, las preferencias sexuales, u otras análogas, que afecten su intimidad.¹²¹

El *Tribunal Electoral*, ha sostenido que el derecho a la vida privada de las persona, concede a su titular, la atribución de resguardar ese ámbito privado, **con el poder de decidir sobre la publicidad de los datos de su persona, lo que supone la facultad de elegir cuáles pueden ser conocidos y cuáles deben permanecer en reserva, además de designar quién y bajo qué modalidades pueden utilizarlos**, dado que la protección de datos personales incluye el derecho de autodeterminación informativa como uno de los fines para propiciar la confiabilidad en el manejo y cuidado de las referencias concernientes a las personas en el ámbito de su vida privada, así el Estado a través de sus órganos adoptará las medidas tendentes a hacer efectiva la tutela del referido derecho.¹²²

A su vez, la Sala Regional Especializada ha sostenido que “las leyes respectivas en materia de transparencia y tratamiento de datos personales deben considerar el consentimiento del titular (consentimiento informado), es decir, dar a conocer claramente la finalidad y el propósito del almacenamiento de sus datos y la posibilidad de que éstos sean dados a conocer a terceros.”¹²³

2) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

En el artículo 23, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

En consecuencia, el artículo 68 de la misma Ley, establece que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

¹²¹ Artículo 2, numeral 1, fracción XVII del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a información Pública, aprobado en sesión ordinaria del Consejo General, celebrada el 2 de julio de 2014, mediante Acuerdo INE/CG70/2014 y abrogados mediante acuerdo INE/CG281/2016, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

¹²² Tesis XVIII/2014 cuyo rubro dice: DATOS PERSONALES. LOS CIUDADANOS ESTÁN FACULTADOS PARA DECIDIR Y CONSENTIR SU DIFUSIÓN.

¹²³ SRE-PSC-193/2015, p. 76, consultable en la liga electrónica http://www.te.gob.mx/EE/SRE/2015/PSC/193/SRE_2015_PSC_193-487400.pdf

I. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

II. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de la normativa aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

III. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Además, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,¹²⁴ se establecía en el artículo 18, que se consideran confidenciales los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización.

Por su parte el artículo 20 fracciones I, II, III y VI, prevé que los sujetos responsables de los datos personales deben adoptar procedimientos adecuados, entre otros, para capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con su protección; tratarlos solo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido; poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento; adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Asimismo, en el artículo 21 del mismo ordenamiento se establece que los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.

¹²⁴ Ley vigente en lo que concierne a la protección de datos personales, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015, así como las bases 1; 2; 4.3 y 9.1 del Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2015.

Por último, en los artículos 24 y 25 de dicha Ley se establece que los titulares de los datos personales tienen derecho a solicitar el acceso o la corrección de sus datos personales que obren en cualquier sistema.

3) Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

En el Reglamento en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Instituto¹²⁵ vigente al momento de la posible infracción, se establecía en el artículo 1, que su objeto era establecer los órganos, criterios y procedimientos institucionales para garantizar a toda persona los derechos fundamentales de acceso a la información pública y de protección a los datos personales, en posesión del Instituto Nacional Electoral y de los partidos políticos.

En el artículo 12 del mismo ordenamiento reglamentario se definió como información confidencial: la entregada con tal carácter por los particulares al Instituto incluyendo la relativa al Registro Federal de Electores; los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión en términos de las disposiciones legales aplicables, y la que, por disposición expresa de la legislación aplicable, sea considerada como confidencial.

Por último, en el artículo 70 se establecen como obligaciones de los partidos políticos:

- I. Actuar con diligencia en la clasificación y conservación de la información;
- II. Asegurar el buen manejo de la información que se encuentre bajo su resguardo, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

Bajo ese contexto, como se ha dicho, los datos personales por tratarse de derechos humanos deben ser protegidos con independencia de quien acuda a la instancia competente para su resguardo, y, por tanto, proteger el principio de confidencialidad del que es objeto, pues lo que se protege es el interés público reconocido constitucionalmente y el derecho de las personas a gozar de tal protección.

¹²⁵ Aprobado en Sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 2 de julio de dos mil catorce.

4) Normativa Interna del *PRD*

Los artículos 1, 125 y 127 establecen que la Unidad de Transparencia será el órgano colegiado encargado de vigilar y garantizar el debido cumplimiento del acceso a la información y protección de los datos personales al interior del Partido, para lo cual deberá llevar a cabo las acciones y gestiones necesarias para entregar o poner a disposición la información de interés público que se encuentre en poder del Partido, siempre y cuando se cumpla con la normatividad aplicable y salvaguardando los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales.

Por su parte, el artículo 16 de los referidos Estatutos, establece que toda persona afiliada tiene derecho a que se protejan sus datos personales, así como a acceder, rectificar, cancelar, así como oponerse a su uso.

5. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO.

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando una persona pretenda, libre y voluntariamente, ser registrada como militante de un partido político, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrada en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el *PRD*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que la o el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente SUP-RAP-107/2017,¹²⁶ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia **21/2013**, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹²⁷ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹²⁸ y como estándar probatorio.¹²⁹

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹³⁰ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada

¹²⁶ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judicial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹²⁷ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

¹²⁸ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹²⁹ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

¹³⁰ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *LGSMIME*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la **constancia de inscripción respectiva**, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que una persona desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la

prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad de la o del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento de la persona denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo una persona previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por la parte quejosa, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*

*3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y **aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

[Énfasis añadido]

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia **4/2005**¹³¹ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, **esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.** Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que **a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba.** Dicho de otra forma, **quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.**

[Énfasis añadido]

¹³¹ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIÓN A LOS.**¹³²
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.**¹³³
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**¹³⁴
- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)**¹³⁵
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS**¹³⁶
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**¹³⁷

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,¹³⁸ dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

¹³² Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

¹³³ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

¹³⁴ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

¹³⁵ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

¹³⁶ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

¹³⁷ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

¹³⁸ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.*
[Énfasis añadido]

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia **III.1o.C. J/29**,¹³⁹ sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafoscopista, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.*
[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad de la persona, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que la parte quejosa realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica,

¹³⁹ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

la persona denunciante afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este *Consejo General*, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la *Sala Superior*—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

6. HECHOS ACREDITADOS.

Al respecto, es importante precisar que las denuncias presentadas por las y los ciudadanos quejosos, versan sobre:

- A)** Respecto de **Sandra Luz Iñiguez Cruz, Lorenzo Velasco López, Antonio Cervantes Corona, Jesús Librado Mora Rojas, Laura Lidia Monsalvo Loperena, Lorenzo Ríos Gómez, Yonathan Antolín López Pérez, Mariana Ivonne Vázquez Herrera, Rebeca Alejandra Cosío Estrada, Manolo Diego Cantoriano, Sara Catalán Landeros, Marisol Ramírez Gómez, Rosalba Sánchez Peña, Carlos Arturo de la Paz Manrique, Baltazar Lorenzo Valente, Melina Estrella Sánchez Zárate, Esmeralda Chávez Jaimes, Gloria Andrea Pérez Valdez, Jaime Helios Carbajal Gutiérrez y Dulce Ariana Cohuo Chan**, las denuncias versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación al ser incorporados al padrón del *PRD*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.
- B)** En el caso de **Marisol Ramírez Gómez**, el posible indebido ejercicio del derecho constitucional y legal del *PRD*, de nombrarla como su representante ante mesa directiva de casilla, sin su consentimiento, haciendo uso indebido de sus datos personales para ello.

Ahora bien, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones, se tiene lo siguiente respecto a:

A) La presunta vulneración al derecho de libertad de afiliación

Al respecto, es preciso señalar que, toda vez que el *PRD* informó que los datos para la afiliación de los quejosos se recabaron mediante el uso de la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano-INE”, la *UTCE* solicitó a la *DERFE* que informara si esa Dirección contaba con los expedientes electrónicos de afiliación, por lo que, de ser el caso, remitiera los mismos.

En tal virtud, mediante oficio INE/DERFE/STN/2236/2021, la *DERFE* informó, en lo que interesa, lo siguiente:

“Con la finalidad de dar atención al requerimiento de mérito, le comento que, de conformidad con los Lineamientos que regulan el uso de la aplicación móvil que permite recabar los datos e integrar el expediente electrónico que acredite la voluntad de la ciudadanía para afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un Partido Político Nacional, aprobados mediante Acuerdo INE/CG231/2019, del Consejo General de este Instituto, en los cuales se define lo siguiente:

‘...’

p) Expediente electrónico: Conjunto de archivos captados por la aplicación móvil que acreditan la voluntad de la ciudadanía de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un Partido Político Nacional, el cual está conformado por las imágenes correspondientes al anverso y reverso de la Credencial para Votar original, fotografía viva de la o el ciudadano y la firma manuscrita digitalizada de la o el ciudadano.

...’

*En razón de lo anterior me permito informar que, el área técnica de esta Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores refirió que realizó las gestiones necesarias para proceder a la generación de los 20 (veinte) expedientes electrónicos que corresponden a los ciudadanos solicitados por la Unidad Técnica a su digno cargo, **mismos que fueron afiliados al Partido de la Revolución Democrática a través de la App Apoyo Ciudadano-INE** del Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos.”*

Precisado lo anterior, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en los cuadros siguientes se resumirá, por cada persona denunciante, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que fueron advertidas:

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
1	Sandra Luz Iñiguez Cruz	Fecha de afiliación: 18/07/2019 Fecha de baja: 19/11/2020 Fecha de cancelación: 20/11/2020	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRD</i> manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">ACAR-283/2020</p> <p>Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE".</p>
		Información proporcionada por la <i>DERFE</i>	
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 31/07/2019	<p>Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político.</p> <p style="text-align: center;">ACAR-297/2020</p> <p>Remitió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/8033/2020 signed por el Titular de la <i>DEPPP</i> a efecto de acreditar que se dio de baja a los denunciantes</p> <p style="text-align: center;">ACAR-157-2022</p> <p>Remitió la <i>cédula electrónica</i> aportada por la <i>DERFE</i></p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.
4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.
5. El PRD y la *DERFE* proporcionaron la *Cédula electrónica* de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y **firma manuscrita digitalizada** a través de la aplicación móvil.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con la <i>Cédula electrónica</i>, que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar la <i>cédula electrónica</i> aportada.</p> <p>Se concluye que <u>NO se trata de una afiliación indebida</u> pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por la quejosa.</p>			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
2	Lorenzo Velasco López	Fecha de afiliación: 04/07/2019	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente:</p> <p>ACAR-283/2020</p> <p>Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE".</p> <p>Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político.</p> <p>ACAR-157-2022</p> <p>Remitió la <i>cédula electrónica</i> aportada por la DERFE</p>
		Fecha de baja: 19/11/2020	
		Fecha de cancelación: 20/11/2020	
		Información proporcionada por la DERFE	
		Fecha de afiliación de la <i>Cédula Electrónica</i> : 24/08/2019	

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>4.No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.</p> <p>5. El PRD y la DERFE proporcionaron la <i>Cédula electrónica</i> de la persona denunciante en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y <u>firma manuscrita digitalizada</u> a través de la aplicación móvil.</p> <p>6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con la <i>Cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. En respuesta a la vista formulada mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso refirió que la afiliación al PRD se realizó sin su consentimiento.</p> <p>No obstante que el quejoso objetó la <i>cédula electrónica</i>, se considera que sus manifestaciones resultan insuficientes para desvirtuar los elementos que obran en el expediente, pues no aporta elementos para restar o nulificar el valor probatorio de la <i>cédula electrónica</i> aportada por el denunciado, por lo que se debe concluir que NO se trata de una afiliación indebida.</p>			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
3	Antonio Cervantes Corona	<p>Fecha de afiliación: 21/05/2019</p> <p>Fecha de baja: 19/11/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 20/11/2020</p>	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">ACAR-283/2020</p> <p>Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE".</p>
		<p>Información proporcionada por la DERFE</p> <p>Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 11/06/2019</p>	<p>Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político.</p> <p style="text-align: center;">ACAR-157-2022</p> <p>Remitió la <i>cédula electrónica</i> aportada por la DERFE</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
Conclusiones			
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:			
1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.			
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.			
3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.			
4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.			
5. El PRD y la DERFE proporcionaron la <i>Cédula electrónica</i> de la persona denunciante en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y firma manuscrita digitalizada a través de la aplicación móvil.			
6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con la <i>Cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.			
7. El quejoso no realizó manifestación alguna para objetar <i>la cédula electrónica</i> aportada.			
Se concluye que NO se trata de una afiliación indebida pues el denunciado aportó <i>la respectiva cédula electrónica</i> de afiliación y dicho documento no fue objetado por el quejoso.			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
4	Jesús Librado Mora Rojas	Fecha de afiliación: 21/05/2019	Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente: ACAR-283/2020 Informó que no se encontró coincidencia respecto de dicho denunciante, por lo que se mandató al área de informática y sistemas del órgano de afiliación a efectuar la cancelación de sus datos.
		Fecha de baja: 23/10/2020	
		Fecha de cancelación: 23/10/2020	
		Información proporcionada por la DERFE	

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
		Fecha de afiliación de la cédula electrónica: 05/06/2019	<p>Por lo que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político.</p> <p style="text-align: center;">ACAR-157-2022</p> <p>Remitió <i>la cédula electrónica</i> aportada por la DERFE</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento. 2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político. 3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante. 4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado. 5. El PRD y la <i>DERFE</i> proporcionaron <i>la cédula electrónica</i> de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y <u>firma manuscrita digitalizada</u> a través de la aplicación móvil. 6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con <i>la cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 7. El quejoso no realizó manifestación alguna para objetar <i>la cédula electrónica</i> aportada. <p>Se concluye que <u>NO se trata de una afiliación indebida</u> pues el denunciado aportó la respectiva <i>cédula electrónica</i> de afiliación y dicho documento no fue objetado por el quejoso.</p>			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
5	Laura Lidia Monsalvo Loperena	Fecha de afiliación: 31/05/2019 Fecha de baja: 19/11/2020 Fecha de cancelación: 20/11/2020	Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente: ACAR-283/2020 Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE".
		Información proporcionada por la DERFE	
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 18/07/2019	Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político. ACAR-157-2022 Remitió <i>la cédula electrónica</i> aportada por la DERFE

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.
4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.
5. El PRD y la DERFE proporcionaron *la cédula electrónica* de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y **firma manuscrita digitalizada** a través de la aplicación móvil.
6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con *la cédula electrónica* que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.
7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar *la cédula electrónica* aportada.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
-----	-----------	----------------------------------------	--------------------------------------

Se concluye que **NO se trata de una afiliación indebida** pues el denunciado aportó la respectiva *cédula electrónica* de afiliación y dicho documento no fue objetado por la quejosa.

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
6	Lorenzo Ríos Gómez	Fecha de afiliación: 21/05/2019 Fecha de baja: 06/11/2020 Fecha de cancelación: 07/11/20200	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">ACAR-283/2020</p> <p>Informó que no se encontró coincidencia respecto de dicho denunciante, por lo que se mandató al área de informática y sistemas del órgano de afiliación a efectuar la cancelación de sus datos. Por lo que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político.</p> <p style="text-align: center;">ACAR-157-2022</p> <p>Remitió <i>la cédula electrónica</i> aportada por la DERFE</p>
		Información proporcionada por la DERFE	
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 11/06/2019	

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.
4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.
5. El PRD y la DERFE proporcionaron *la cédula electrónica* de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y **firma manuscrita digitalizada** a través de la aplicación móvil.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con <i>la cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. El quejoso no realizó manifestación alguna para objetar <i>la cédula electrónica</i> aportada.</p> <p>Se concluye que <u>NO se trata de una afiliación indebida</u> pues el denunciado aportó la respectiva <i>cédula electrónica</i> de afiliación y dicho documento no fue objetado por el quejoso.</p>			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
7	Yonathan Antolín López Pérez	Fecha de afiliación: 10/03/2014 Fecha de baja: 19/11/2020 Fecha de cancelación: 20/11/2020	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente:</p> <p>ACAR-283/2020</p> <p>Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE".</p> <p>Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político.</p> <p>ACAR-157-2022</p> <p>Remitió <i>la cédula electrónica</i> aportada por la DERFE</p>
		Información proporcionada por la DERFE	
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 18/08/2019	

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>4.No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.</p> <p>5. El PRD y la DERFE proporcionaron <i>la cédula electrónica</i> de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y <u>firma manuscrita digitalizada</u> a través de la aplicación móvil.</p> <p>6. Mediante proveídos de dieciocho de mayo y cuatro de agosto de dos mil veintiuno [reposición de notificación] se dio vista a la persona denunciante con <i>la cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. El quejoso no realizó manifestación alguna para objetar <i>la cédula electrónica</i> aportada.</p> <p>Se concluye que <u>NO se trata de una afiliación indebida</u> pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por el quejoso.</p>			

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
8	Mariana Ivonne Vázquez Herrera	Fecha de afiliación: 02/07/2019	Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRD</i> manifestó lo siguiente: ACAR-283/2020 Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano-INE”. Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político. ACAR-157-2022 Remitió <i>la cédula electrónica</i> aportada por la DERFE
		Fecha de baja: 19/10/2020	
		Fecha de cancelación: 20/11/2020	
		Información proporcionada por la DERFE	
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 25/08/2019	
Conclusiones			
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.</p> <p>2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.</p> <p>4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.</p> <p>5. El PRD y la DERFE proporcionaron <i>la cédula electrónica</i> de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y firma manuscrita digitalizada a través de la aplicación móvil.</p> <p>6. Mediante proveídos de dieciocho de mayo y cuatro de agosto de dos mil veintiuno [reposición de notificación] se dio vista a la persona denunciante con <i>la cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar <i>la cédula electrónica</i> aportada.</p> <p>Se concluye que NO se trata de una afiliación indebida pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por la quejosa.</p>			

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
9	Rebeca Alejandra Cosío Estrada	<p>Fecha de afiliación: 31/05/2019</p> <p>Fecha de baja: 19/11/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 20/11/2020</p> <p>Información proporcionada por la DERFE</p>	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente:</p> <p>ACAR-283/2020</p> <p>Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 21/07/2019	<p>realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE".</p> <p>Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político.</p> <p style="text-align: center;">ACAR-157-2022</p> <p>Remitió <i>la cédula electrónica</i> aportada por la DERFE</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento. 2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político. 3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante. 4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado. 5. El PRD y la <i>DERFE</i> proporcionaron <i>la cédula electrónica</i> de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y <u>firma manuscrita digitalizada</u> a través de la aplicación móvil. 6. Mediante proveídos de dieciocho de mayo y cuatro de agosto de dos mil veintiuno [reposición de notificación] se dio vista a la persona denunciante con <i>la cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar <i>la cédula electrónica</i> aportada. <p>Se concluye que <u>NO se trata de una afiliación indebida</u> pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por la quejosa.</p>			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
10	Manolo Diego Cantoriano	Fecha de afiliación: 23/05/2019 Fecha de baja: 19/11/2020 Fecha de cancelación: 20/11/2020	Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente: ACAR-283/2020 Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE".
		Información proporcionada por la DERFE	
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 22/08/2019	Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político. ACAR-157-2022 Remitió <i>la cédula electrónica</i> aportada por la DERFE

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.
4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.
5. El PRD y la DERFE proporcionaron *la cédula electrónica* de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona e imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) a través de la aplicación móvil.
6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con *la cédula electrónica* que contiene sus datos, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.
7. El quejoso no realizó manifestación alguna para objetar el expediente electrónico aportado.

De la revisión del expediente se advierte que el mismo carece de firma manuscrita digitalizada, el cual es un elemento mínimo que debe integrar la *cédula electrónica* para tenerla por válida.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
-----	-----------	----------------------------------------	--------------------------------------

Se concluye que **Sí se trata de una afiliación indebida** pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación, no obstante el mismo carece de firma manuscrita digitalizada.

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
11	Sara Catalán Landeros	Fecha de afiliación: 18/07/2019	Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente: ACAR-283/2020 Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE". Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político. ACAR-157-2022 Remitió la <i>cédula electrónica</i> aportada por la DERFE
		Fecha de baja: 19/11/2020	
		Fecha de cancelación: 20/11/2020	
		Información proporcionada por la DERFE	
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 21/08/2019	

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.
4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.
5. El PRD y la DERFE proporcionaron la *cédula electrónica* de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y **firma manuscrita digitalizada** a través de la aplicación móvil.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con <i>la cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar <i>la cédula electrónica</i> aportada.</p> <p>Se concluye que <u>NO se trata de una afiliación indebida</u> pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por la quejosa.</p>			

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
12	Marisol Ramírez Gómez	Fecha de afiliación: 25/06/2019 Fecha de baja: 19/11/2020 Fecha de cancelación: 20/11/2020	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">ACAR-283/2020</p> <p>Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE".</p> <p>Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político.</p> <p style="text-align: center;">ACAR-157-2022</p> <p>Remitió <i>la cédula electrónica</i> aportada por la DERFE</p>
		Información proporcionada por la DERFE	
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 13/08/2019	

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>4.No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.</p> <p>5. El PRD y la DERFE proporcionaron <i>la cédula electrónica</i> de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y <u>firma manuscrita digitalizada</u> a través de la aplicación móvil.</p> <p>6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con <i>la cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar <i>la cédula electrónica</i> aportada.</p> <p>Se concluye que NO se trata de una afiliación indebida pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por la quejosa.</p>			

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
13	Rosalba Sánchez Peña	Fecha de afiliación: 16/07/2019	Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente: ACAR-283/2020 Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano-INE”. Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político. ACAR-157-2022 Remitió la <i>cédula electrónica</i> aportada por la DERFE
		Fecha de baja: 19/11/2020	
		Fecha de cancelación: 20/11/2020	
		Información proporcionada por la DERFE	
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 26/07/2019	
Conclusiones			
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:			
1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.</p> <p>4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.</p> <p>5. El PRD y la DERFE proporcionaron <i>la cédula electrónica</i> de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y firma manuscrita digitalizada a través de la aplicación móvil.</p> <p>6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con <i>la cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar <i>la cédula electrónica</i> aportada.</p> <p>Se concluye que NO se trata de una afiliación indebida pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por la quejosa.</p>			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
14	Carlos Arturo de la Paz Manrique	Fecha de afiliación: 27/06/2019 Fecha de baja: 19/11/2020 Fecha de cancelación: 20/11/2020	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">ACAR-283/2020</p> <p>Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había</p>
		Información proporcionada por la DERFE	

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 28/07/2019	realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE". Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político. ACAR-157-2022 Remitió <i>la cédula electrónica</i> aportada por la DERFE

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.
4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.
5. El PRD y la DERFE proporcionaron *la cédula electrónica* de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y **firma manuscrita digitalizada** a través de la aplicación móvil.
6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con *la cédula electrónica* que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.
7. El quejoso no realizó manifestación alguna para objetar *la cédula electrónica* aportada.

Se concluye que **NO se trata de una afiliación indebida** pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por el quejoso.

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
15	Baltazar Lorenzo Valente	Fecha de primera afiliación: 01/04/2013	Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente:

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
		<p>Fecha de primera baja: 22/03/2018</p> <p>Fecha de primera cancelación: 03/04/2018</p> <p>Fecha de segunda afiliación: 23/05/2019</p> <p>Fecha de segunda baja: 19/10/2020</p> <p>Fecha de segunda cancelación: 20/11/2020</p>	<p>ACAR-283/2020 Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE".</p> <p>Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político.</p>
		<p>Información proporcionada por la DERFE</p>	<p>ACAR-157-2022 Remitió <i>la cédula electrónica</i> por la DERFE</p>
		<p>Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 23/08/2019</p>	
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento. 2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político. 3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante. 4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado. 5. El PRD y la <i>DERFE</i> proporcionaron <i>la cédula electrónica</i> de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y <u>firma manuscrita digitalizada</u> a través de la aplicación móvil. 6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con <i>la cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 7. El quejoso no realizó manifestación alguna para objetar <i>la cédula electrónica</i> aportada. 			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
-----	-----------	----------------------------------------	--------------------------------------

Se concluye que **NO se trata de una afiliación indebida** pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por el quejoso.

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
16	Melina Estrella Sánchez Zárate	Fecha de afiliación: 06/08/2019	Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente: ACAR-283/2020 Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE". Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político. ACAR-157-2022 Remitió <i>la cédula electrónica</i> aportada por la DERFE
		Fecha de baja: 19/11/2020	
		Fecha de cancelación: 20/11/2020	
		Información proporcionada por la DERFE	
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 25/08/2019	

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.
4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.
5. El PRD y la DERFE proporcionaron *la cédula electrónica* de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y **firma manuscrita digitalizada** a través de la aplicación móvil.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con <i>la cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar <i>la cédula electrónica</i> aportada.</p> <p>Se concluye que <u>NO se trata de una afiliación indebida</u> pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por la quejosa.</p>			

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
17	Esmeralda Chávez Jaimes	Fecha de afiliación: 16/07/2019 Fecha de baja: 19/11/2020 Fecha de cancelación: 20/11/2020	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente:</p> <p>ACAR-283/2020</p> <p>Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE".</p> <p>Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político.</p> <p>ACAR-157-2022</p> <p>Remitió <i>la cédula electrónica</i> aportada por la DERFE</p>
		Información proporcionada por la DERFE	
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 07/08/2019	

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>4.No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.</p> <p>5. El PRD y la DERFE proporcionaron <i>la cédula electrónica</i> de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y <u>firma manuscrita digitalizada</u> a través de la aplicación móvil.</p> <p>6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con <i>la cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar <i>la cédula electrónica</i> aportada.</p> <p>Se concluye que NO se trata de una afiliación indebida pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por la quejosa.</p>			

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
18	Gloria Andrea Pérez Valdez	Fecha de afiliación: 20/08/2019	Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRD</i> manifestó lo siguiente: ACAR-283/2020 Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano-INE”. Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político. ACAR-157-2022 Remitió <i>la cédula electrónica</i> aportada por la DERFE
		Fecha de baja: 19/11/2020	
		Fecha de cancelación: 20/11/2020	
		Información proporcionada por la DERFE	
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 22/08/2019	
Conclusiones			
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:			
1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.</p> <p>4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.</p> <p>5. El PRD y la DERFE proporcionaron <i>la cédula electrónica</i> de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y <u>firma manuscrita digitalizada</u> a través de la aplicación móvil.</p> <p>6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con <i>la cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar <i>la cédula electrónica</i> aportada.</p> <p>Se concluye que <u>NO se trata de una afiliación indebida</u> pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por la quejosa.</p>			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
19	Jaime Helios Carbajal Gutiérrez	<p>Fecha de afiliación: 17/05/2019</p> <p>Fecha de baja: 19/11/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 20/11/2020</p> <p>Información proporcionada por la DERFE</p>	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente:</p> <p>ACAR-283/2020</p> <p>Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
		<p>Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 22/06/2019</p>	<p>realizado mediante la aplicación móvil denominada "Apoyo ciudadano-INE".</p> <p>Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político.</p> <p>ACAR-157-2022 Remitió <i>la cédula electrónica</i> aportada por la DERFE</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento. 2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político. 3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante. 4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado. 5. El PRD y la <i>DERFE</i> proporcionaron <i>la cédula electrónica</i> de la persona denunciante, en el que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y <u>firma manuscrita digitalizada</u> a través de la aplicación móvil. 6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con <i>la cédula electrónica</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 7. En respuesta a la vista formulada mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso refirió que desconoce la firma ya que tiene variaciones. <p>No obstante que el quejoso objetó <i>la cédula electrónica</i>, se considera que sus manifestaciones resultan insuficientes para desvirtuar los elementos que obran en el expediente, pues no aporta elementos para restar o nulificar el valor probatorio de <i>la cédula electrónica</i> aportada por el denunciado, por lo que se debe concluir que NO se trata de una afiliación indebida.</p>			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
20	Dulce Ariana Cohuo Chan	Fecha de afiliación: 23/07/2019 Fecha de baja: 19/11/2020 Fecha de cancelación: 20/11/2020	Mediante los siguientes oficios el representante del PRD manifestó lo siguiente: ACAR-283/2020 Informó que encontró registro de la persona denunciante, pero que se encontraba imposibilitado de entregar la cédula ya que la afiliación se había realizado mediante la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano-INE”.
		Información proporcionada por la DERFE	
		Fecha de afiliación de la Cédula Electrónica: 27/07/2019	Señaló también que dicha persona denunciante ya no se encontraba en el padrón de ese instituto político. ACAR-157-2022 Remitió la <i>cédula electrónica</i> aportada por la DERFE
Conclusiones			
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:			
1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada al PRD sin su consentimiento.			
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.			
3. El PRD reconoció a la persona denunciante como su militante.			
4.No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada del PRD, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.			
5. El PRD y la DERFE proporcionaron la <i>cédula electrónica</i> de la persona denunciante, en la que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y firma manuscrita digitalizada a través de la aplicación móvil.			
6. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con la <i>Cédula</i> que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.			
7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar la <i>cédula electrónica</i> aportada.			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

No.	Ciudadana	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
Se concluye que NO se trata de una afiliación indebida pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por la quejosa.			

B) El posible indebido ejercicio del derecho constitucional y legal del PRD, de nombrar a la quejosa como su representante ante mesa directiva de casilla.

Ciudadana: Marisol Ramírez Gómez	
Manifestaciones realizadas por el PRD¹⁴⁰	<p>Mediante oficio ACAR-746/2021, el representante propietario del PRD informó que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el estado de Guerrero informó que no se cuenta con la documentación, toda vez que el 12 de diciembre de 2020, las instalaciones de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el estado de Guerrero fueron vandalizadas causándose pérdidas materiales de bienes muebles y documentos resguardados en las instalaciones, por lo que por causas de fuerza mayor se encuentran imposibilitados para acreditar el debido registro de la ciudadana como representante ante Mesa Directiva de Casilla. - A efecto de acreditar su dicho aportó copia del escrito signado por el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el estado de Guerrero, bitácora fotográfica y reporte general de daños
Vocal Secretario de la 07 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Guerrero¹⁴¹	<p>Mediante oficio INE/JD07-GRO/VS/0479/2021, informó que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marisol Ramírez Gómez fue acreditada como representante ante Mesa Directiva de Casilla por el PRD, para el Proceso Electoral 2017-2018, en la sección 1267, casilla C6, del 07 Distrito Federal en el estado de Guerrero, como representante propietaria 1. - El PRD utilizó el Sistema de Representantes de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes, no otorgando una solicitud previa para el registro, capturando los datos de su representante en la sección correspondiente. - Aportó copia certificada de la <i>CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL</i> y del <i>Reporte de Listado de información del registro de representantes ante casilla</i>. - Aunado a lo anterior remitió certificación mediante la cual señala que una vez extraída la documentación electoral del paquete electoral correspondiente a la sección electoral 1267 casilla C6, no se encontró el acta de la jornada electoral dentro de la documentación depositada por los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla.

¹⁴⁰ Visible a fojas 585 a 604 del expediente.

¹⁴¹ Visible a fojas 403 a 407 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización¹⁴²	<p>Mediante oficio INE/UTF/DA/39506/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización informó que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El partido político sí reportó gastos de jornada electoral para el Distrito Electoral Federal 07 en el estado de Guerrero, no obstante el pago a los representantes generales y de casilla únicamente se identifica por el ID del Distrito Federal y no así con el nombre de la persona representante.
Director Ejecutivo de Organización Electoral¹⁴³	<p>Mediante oficio INE/DEOE/2295/2021, el Director Ejecutivo de Organización Electoral informó que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Consejo General de este Instituto emitió el Acuerdo por el que se aprueba el Modelo para la Operación del Sistema para el Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, Generales y ante Mesas Directivas de Casilla, para el Proceso Electoral 2017-2018, así como para los Procesos Extraordinarios que deriven del mismo. - En dicho Acuerdo se señala que el <i>Sistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes</i> es el mecanismo para el registro de representantes. - La captura quedó a cargo de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes. - Aportó captura de pantalla del <i>Sistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidatos Independientes PE 2017-2018</i> y archivo <i>Excel con el Reporte de Listado de información del registro de representantes ante casillas</i>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue acreditada por el PRD como su representante ante Mesa Directiva de Casilla, sin su consentimiento.
2. La DEOE y el Vocal Secretario de la 07 Junta Distrital Ejecutiva informaron que el PRD sí acreditó a Marisol Ramírez Gómez como representante propietaria 1. ante Mesa Directiva de Casilla, para el Proceso Electoral 2017-2018, en la sección 1267, casilla C6, del 07 Distrito Federal en el estado de Guerrero.
3. El PRD informó que no cuenta con documentación, toda vez que el 12 de diciembre de 2020, las instalaciones de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en el estado de Guerrero fueron vandalizadas causándose pérdidas materiales de bienes muebles y documentos resguardados en las instalaciones, por lo que se encuentran imposibilitados para acreditar el debido registro de la ciudadana como representante ante Mesa Directiva de Casilla.

¹⁴² Visible a fojas 645 a 649 del expediente.

¹⁴³ Visible a fojas 681 a 685 del expediente.

4. El Vocal Secretario de la 07 Junta Distrital Ejecutiva aportó *CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL* en la que se aprecia el nombre de Marisol Ramírez Gómez y una firma en el espacio destinado para los nombres de los representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes, correspondiente al PRD.

5. Mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y se corrió traslado a la quejosa con la referida constancia de clausura de casilla.

7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar dicha constancia.

Se concluye que **NO se trata de una acreditación indebida** pues de las constancias de autos se advierte una documental de la jornada electoral con el nombre y firma de la quejosa, de la cual se desprende que la quejosa participó como representante del *PRD* ante Mesa Directiva de Casilla y dicho documento no fue objetado.

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, la *DEOE*, la *UTF* y el Vocal Secretario de la 07 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Guerrero al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por lo que hace a las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, así como por los denunciantes, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II, del *Reglamento de Quejas* y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3, de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

7. CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LA PRESUNTA VULNERACIÓN AL DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN.

Previo al análisis detallado de la infracción aducida por las personas denunciantes, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es

posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de las y los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliados, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionadas con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento de la persona para cualquier caso— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *LGSMIME*, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el diverso 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de la persona quejosa para afiliarla a su partido

político, y no a la persona que negó haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes de dicho instituto político.

Por lo que, en el caso concreto, la carga de la prueba corresponde al *PRD*, en tanto que el dicho del denunciante consiste en que no dio su consentimiento para ser militante de dicho instituto político, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

Ahora bien, de conformidad con lo señalado por la *Sala Superior* al emitir la Jurisprudencia **3/2019**, de rubro ***DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO***, en la que estableció que, si una persona denuncia una afiliación sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, **debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político.**

Como quedó evidenciado, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y el propio instituto político denunciado, que las y los quejosos se encontraron, en algún momento afiliados al *PRD*.

En ese contexto, para determinar si el *PRD* incurrió o no en una posible infracción a la normativa electoral, el análisis correspondiente se dividirá en DOS apartados:

Apartado A. Personas a quienes el *PRD* NO conculcó su derecho de libre afiliación.

Apartado B. Ciudadano a quien el *PRD* SÍ conculcó su derecho de libre afiliación.

Apartado A. Personas a quienes el *PRD* NO conculcó su derecho de libre afiliación.

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de **Sandra Luz Iñiguez Cruz, Lorenzo Velasco López, Antonio Cervantes Corona, Jesús Librado Mora Rojas, Laura Lidia Monsalvo Loperena, Lorenzo Ríos Gómez, Yonathan Antolín López Pérez, Mariana Ivonne Vázquez Herrera, Rebeca Alejandra Cosío Estrada, Sara Catalán Landeros, Marisol Ramírez Gómez, Rosalba Sánchez Peña, Carlos Arturo de la Paz Manrique, Baltazar Lorenzo Valente, Melina Estrella Sánchez Zárate,**

Esmeralda Chávez Jaimes, Gloria Andrea Pérez Valdez, Jaime Helios Carbajal Gutiérrez y Dulce Ariana Cohuo Chan conforme a las pruebas que obran en autos, en específico la información proporcionada por la *DEPPP*, la *DERFE* así como por lo manifestado por el *PRD* y las documentales que éste aportó, fueron apegadas a derecho.

Ahora bien, el análisis correspondiente se dividirá en dos subapartados:

- 1. Subapartado relativo a las personas denunciantes que no objetaron los formatos aportados por el *PRD***
- 2. Subapartado relativo a las personas denunciantes que objetaron los formatos aportados por el *PRD***

1. Subapartado relativo a las personas denunciantes que no objetaron los formatos aportados por el *PRD*

Como se precisó previamente, el documento idóneo para acreditar que un ciudadano expresó su voluntad de afiliarse a un partido político, es la constancia de inscripción respectiva.

En el caso, como quedó establecido en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, la *DERFE* y el *PRD* aportaron las pruebas idóneas para acreditar la debida afiliación de **Sandra Luz Iñiguez Cruz, Antonio Cervantes Corona, Jesús Librado Mora Rojas, Laura Lidia Monsalvo Loperena, Lorenzo Ríos Gómez, Yonathan Antolín López Pérez, Mariana Ivonne Vázquez Herrera, Rebeca Alejandra Cosío Estrada, Sara Catalán Landeros, Marisol Ramírez Gómez, Rosalba Sánchez Peña, Carlos Arturo de la Paz Manrique, Baltazar Lorenzo Valente, Melina Estrella Sánchez Zárate, Esmeralda Chávez Jaimes, Gloria Andrea Pérez Valdez, y Dulce Ariana Cohuo Chan.**

Al respecto, es importante precisar, que si bien dicho documento fue remitido por una autoridad electoral en ejercicio de sus funciones, lo cierto es que se trata de una documental privada, toda vez que los datos que lo integran (imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (frente y vuelta) y firma manuscrita digitalizada a través de la aplicación móvil) fueron recabados por el propio partido político; los cuales, *per* se no tiene una eficacia demostrativa plena, pero, apreciadas en su contexto y concatenadas con el acervo probatorio que obra en autos, de conformidad con los principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, permiten a esta autoridad electoral concluir la licitud de las afiliaciones discutidas, ya que se advierte que éstas fueron el resultado de la

manifestación libre y voluntaria de las y los quejosos, la cual quedó constatada con las firmas autógrafas que se asentaron en la citada aplicación móvil.

Por lo anterior, se considera que el *PRD* cumplió con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que las afiliaciones cuestionadas estuvieron precedidas del consentimiento de las personas denunciantes referidas en el presente apartado, pues se aportó el formato ya precisado, en el que aparecen datos como son: el nombre del denunciante, su clave de elector, su sección y domicilio; del mismo modo, aparece una imagen, en anverso y reverso, de la credencial para votar, así como la fotografía y firma del ciudadano que brinda su afiliación.

Ahora bien, con la finalidad de respetar el principio de contradicción y la respectiva garantía de audiencia de las y los quejosos involucrados, durante la sustanciación del procedimiento se ordenó dar vista a los referidos ciudadanos con los expedientes electrónicos de afiliación respectivos, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

De las constancias de autos se advierte que las personas denunciantes fueron omisas en responder a la vista formulada, mediante la que se les corrió traslado con las constancias de afiliación aportadas por el denunciado, así como la vista de alegatos respectiva, por lo que hicieron nulo su derecho de desvirtuar los medios de prueba exhibidos.

En ese sentido, si los referidos quejosos no controvirtieron la respectiva documental exhibida por el *PRD*, para acreditar su afiliación, es válido colegir que existe un reconocimiento tácito de haber suscrito y firmado dichos formatos, lo que de suyo permite concluir que sí existió su voluntad para ser afiliados al partido denunciado y por tanto, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, por tanto, se le da validez a los referidos formatos de afiliación exhibidos por el partido denunciado y la *DERFE*.

En suma, al engarzar la cadena de indicios a partir de diversos hechos que se tuvieron como demostrados, en la especie: i) las manifestaciones de las partes y la *DEPPP* respecto a la existencia de las afiliaciones; ii) las documentales privadas, consistentes en los expedientes electrónicos de afiliación de las partes denunciantes, en cuyo contenido aparece la manifestación de su voluntad (firma autógrafa) y; iii) la falta de objeción a ese formato, esta autoridad resolutoria considera que no existe evidencia objetiva que haga suponer que la afiliación de las y los quejosos referidos, haya sido producto de una acción ilegal por parte del *PRD*.

Se debe destacar que en el apartado de firma del ciudadano que brinda su afiliación, aparece una firma sobre el texto: *Estoy de acuerdo en que mis datos personales proporcionados para afiliarme al PRD, sean transferidos al INE para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de afiliación de partido político. Manifiesto mi voluntad libre e individual de afiliarme al PRD. Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados son ciertos y que por este acto renuncio a cualquier afiliación previa a algún partido político con registro o en proceso de formación.*

Esto es, en las cédulas electrónicas de afiliación remitidas por la DERFE, a nombre de dichos quejosos, obra una firma sobre un texto en el que, sin lugar a dudas, se establece que se trata de un registro de afiliación y que los datos personales proporcionados tienen como objeto llevar a cabo el registro de afiliación al PRD, razón por la que se considera que tal documental acredita de manera fehaciente la voluntad de las personas denunciantes de afiliarse al partido político denunciado y, por el contrario, desacredita la afirmación de que ese registro y el uso de datos presuntamente fue indebido.

Es por ello que, ante la existencia de una cédula de afiliación electrónica a nombre de los denunciantes se acredita que los registros denunciados acontecieron de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que, además, para llevar a cabo ese trámite cumplió con los requisitos establecidos, para tal efecto.


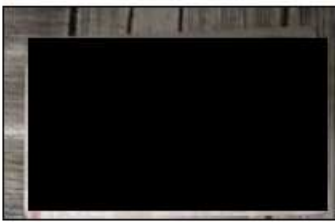



En efecto, se considera que, en dichos casos, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de las personas denunciantes es el formato de afiliación o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normatividad del PRD en materia de afiliación, en la que constara el deseo de dichos ciudadanos de afiliarse a ese partido político, lo cual ha quedado evidenciado.

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que, en los expedientes de afiliación relativos a **Sandra Luz Iñiguez Cruz, Antonio Cervantes Corona, Jesús Librado Mora Rojas, Laura Lidia Monsalvo Loperena, Lorenzo Ríos Gómez, Mariana Ivonne Vázquez Herrera, Rebeca Alejandra Cosío Estrada, Sara Catalán Landeros, Marisol Ramírez Gómez, Rosalba Sánchez Peña, Carlos Arturo de la Paz Manrique, Baltazar Lorenzo Valente, Melina Estrella Sánchez Zárate, Esmeralda Chávez Jaimes, Gloria Andrea Pérez Valdez, y Dulce Ariana Cohuo Chan**, existe un error evidente en la captura de la información por parte del partido político denunciado, el cual, recordemos, es el encargado de dar de alta las afiliaciones en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, toda vez que se asentó la fecha de registro del auxiliar (persona que realizó la afiliación) como si fuera el momento en que se concretó la afiliación.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

Para una mayor ilustración se inserta, el caso de uno de los denunciantes, para representar gráficamente lo señalado:

Información proporcionada por DEPPP							
N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	ENTIDAD	FECHA DE AFILIACIÓN	FECHA DE BAJA	FECHA DE CANCELACIÓN*
1	IÑIGUEZ	CRUZ	SANDRA LUZ	BAJA CALIFORNIA SUR	18/07/2019	19/11/2020	20/11/2020

Cédula de afiliación	
	Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos
Cédula del Expediente Electrónico de Afiliación, Refrendo o Ratificación de la ciudadanía como Militante de un Partido Político	
DATOS DEL CIUDADANO Folio del registro: [REDACTED] Tipo de registro: Afiliación Fecha: 2019-07-31 22:06:14 Situación registral: [REDACTED] Apellido paterno: IÑIGUEZ Apellido materno: CRUZ Nombre(s): SANDRA LUZ Clave de elector: [REDACTED] Sección: [REDACTED] Domicilio: [REDACTED]	DATOS DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL Folio: [REDACTED] Partido político: PRD Periodo de captación: 19088-AFILIACIÓN Y REFRENDO DE PARTIDOS POLÍTICOS FEDERALES (08-05-2019 12:00:00 - 31-03-2020 11:59:59) DATOS DEL RESPONSABLE / REPRESENTANTE DEL PPN Apellido paterno: [REDACTED] Apellido materno: SALAZAR Nombre: EDUARDO HUGO Clave de elector: [REDACTED] CURP: [REDACTED]
DATOS DEL AUXILIAR	
Nombre completo: MARIA LUISA [REDACTED] Clave de elector: [REDACTED] Id auxiliar: 19080 Correo electrónico: [REDACTED]@gmail.com Fecha registro: 18-07-19 05:08:44 Id dispositivo: 1	
CREDENCIAL PARA VOTAR	
	
FOTOGRAFÍA Y FIRMA DEL CIUDADANO QUE BRINDA SU AFILIACIÓN	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Estoy de acuerdo en que mis datos personales proporcionados para afiliarme al PRD, sean transferidos al INE para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de afiliación de partido político. Manifiesto mi voluntad libre e individual de afiliarme al PRD. Dedo bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados son ciertos.</p> </div> 

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

Sin embargo, dichas cédulas electrónicas fueron capturadas a través de la aplicación establecida para dichos fines, la cual cuenta con diversos elementos que hacen que sea posible advertir la voluntad de las personas afiliadas al *PRD*, mediante dicha aplicación, a saber:

- Fotografía viva;
- Imagen de credencial de elector [anverso y reverso];
- Firma sobre la leyenda en la cual se otorga el consentimiento para el uso de sus datos personales con fines de afiliación.

Por tanto, la conclusión debe ser en el sentido de que, la diferencia que se advierte entre las fechas ya precisadas, en modo alguno desvirtúa la certeza que proporcionan las constancias de afiliación de los ciudadanos referidos, pues dichos documentos cuentan con elementos que generan convicción respecto de que las referidas personas denunciadas realmente otorgaron su consentimiento para ser afiliados al partido político denunciado.

A similares consideraciones arribó este *Consejo General* al resolver los expedientes:

Expediente	Resolución	Fecha de resolución
UT/SCG/Q/AYCR/JD19/CDM/261/2020	INE/CG65/2022 ¹⁴⁴	04/02/2022
UT/SCG/Q/YCMM/CG/133/2021	INE/CG58/2022 ¹⁴⁵	04/02/2022
UT/SCG/Q/RMH/DD06/OPL/IECM/154/2021	INE/CG59/2022 ¹⁴⁶	04/02/2022
UT/SCG/Q/JCVE/CG/153/2020	INE/CG429/2022 ¹⁴⁷	20/07/2022

Por otra parte, tampoco pasa desapercibido para esta autoridad que, en el caso de **Yonathan Antolín López Pérez**, existe discrepancia entre la fecha de afiliación reportada por la *DEPPP* y la señalada en el expediente electrónico aportado por el denunciado y por la *DERFE*, como se advierte a continuación:

Persona denunciante	Fecha de afiliación informada por la <i>DEPPP</i>	Fecha de afiliación conforme a la cédula
---------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------

¹⁴⁴ Visible en la página <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126875/CGex202202-04-rp-5-2.pdf>

¹⁴⁵ Visible en la página <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126878/CGex202202-04-rp-5-5.pdf>

¹⁴⁶ Visible en la página <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126879/CGex202202-04-rp-5-6.pdf>

¹⁴⁷ <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/140590/CGex202207-20-rp-1-3.pdf>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

		electrónica proporcionada por la DERFE
Yonathan Antolín López Pérez	10/03/2014	18/08/2019

De lo anterior, se advierte que dicha inconsistencia ocurren por tratarse de una afiliación recabada en el marco del acuerdo INE/CG33/2019, con la que se subsanó un registro realizado con anterioridad al inicio de la entrada en vigor del citado acuerdo.

En ese sentido, entre otras cuestiones, el acuerdo INE/CG33/2019 tenía como finalidad que los partidos políticos depuraran sus padrones, a través de la revisión de sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación **y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte.**

En el caso, si bien el partido político denunciado no aportó las documentales que ampararan el registro de afiliación primigenio, lo cierto es que, en cumplimiento al referido acuerdo INE/CG33/2019, durante la vigencia de éste, en el año dos mil diecinueve, llevó a cabo las acciones necesarias para obtener la documentación comprobatoria de la afiliación.

Es decir, el *PRD* recabó las cédulas de afiliación que amparan los registros de la militancia de las partes denunciadas, en la que, incluso, dada su forma de captación, a través de la aplicación móvil “Apoyo ciudadano-INE” permite obtener registros que contienen **imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar** (frente y vuelta) y **firma manuscrita digitalizada**

Criterio similar sostuvo este Consejo General en las resoluciones INE/CG1531/2021 e INE/CG431/2022 dictadas los días treinta de septiembre de dos mil veintiuno y veinte de julio de dos mil veintidós, en los procedimientos sancionadores ordinarios UT/SCG/Q/BEAG/JD02/SLP/5/2021 y UT/SCG/Q/MLMJ/JD21/CDM/178/2020.

En suma, al no acreditarse uno de los extremos en que se finca el procedimiento sancionador, específicamente la falta de voluntad de afiliarse al partido denunciado, se concluye la inexistencia del tipo administrativo, por lo que no procede imponer al *PRD* sanción alguna.

Ahora bien, más allá de que no se acreditó la infracción denunciada en el presente procedimiento, en el caso, es importante precisar que las personas denunciantes que se analizaron en el presente apartado alcanzaron su pretensión inicial, que consistía en ser dados de baja del registro del padrón de afiliados del *PRD*, pues de lo manifestado por el propio instituto político, de lo señalado por la *DEPPP* y del acta circunstanciada levantada por la *UTCE* se advierte que los mismos fueron dados de baja del padrón de afiliados del partido denunciado.

2. Subapartado relativo a las personas denunciantes que objetaron los formatos aportados por el PRD

Dentro de este supuesto se encuentran **Lorenzo Velasco López y Jaime Helios Carbajal Gutiérrez** respecto de quienes tanto el PRD, como la *DEPPP* informaron que se encontraron afiliados a dicho instituto político y se aportó el expediente electrónico de afiliación captado mediante la aplicación denominada “Apoyo ciudadano-INE”.

Respecto de dichas constancias se dio vista a las personas denunciantes materia del presente procedimiento para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, recibiendo pronunciamientos por parte de **Lorenzo Velasco López y Jaime Helios Carbajal Gutiérrez**, en el siguiente sentido:

Lorenzo Velasco López¹⁴⁸ manifestó:

...
ÚNICO. Manifiesto que no es cierto que estoy afiliado al partido revolucionario democrático, **sín consentimiento** aunque aporten cedula del expediente electrónico o ratificación de afiliación totalmente son falso, no sé donde la hayan obtenido mi copia de credencial de elector, porque de ningún momento lo ha proporcionado mi copia y mucho menos ni le conozco los afiliadores.

1. también manifiesto que la fotografía que lo aporten totalmente es falso porque ningunas vez yo he participado en reuniones o eventos de los partidos políticos veo que son insertado o cortado la fotografía que presentan, porque en el año 2019 estaba yo estudiando todavía en la universidad unich, es por razón manifiesto **mi dolor** que me está afectando el partido de la revolución democrática.

...

¹⁴⁸ Visible a foja 437 del expediente.

Jaime Helios Carbajal Gutiérrez¹⁴⁹ señaló:

...POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO INFORMO Y SOLICITO A LA VEZ LA BAJA DEFINITIVA DEL PADRON DE AFILIACIONES DEL PARTIDO P.R.D. YA QUE COMO INDICAN LA COPIA DEL INE YA ESTA VENCIDA, YA QUE YO ACTUALMENTE CUENTO CON OTRO DOMICILIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS. A SU VEZ DESCONOSCO LA FIRMA QUE SE ANEXA YA QUE SI SE FIJAN BIEN EXISTEN VARIAS VARIACIONES O ALTERACIONES CON RESPECTO A MI FIRMA ORIGINAL. Y POR TAL MOTIVO NO RECONOZCO DICHA AFILIACIÓN, SIN YA QUE A SIMPLE VISTA DIFIERE MUCHO DE MI FIRMA ORIGINAL.

...

Al respecto, debe precisarse que las manifestaciones realizadas por los quejosos son insuficientes para desvirtuar las pruebas aportadas por el denunciado en razón de lo siguiente:

La *Sala Superior* al emitir la Jurisprudencia **3/2019**, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO**, estableció que, si una persona denuncia una afiliación sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, **debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político.**

Por ende, de conformidad con lo sostenido por el máximo órgano jurisdiccional en la materia, el documento idóneo para acreditar que un ciudadano expresó su voluntad de afiliarse a un partido político, es la constancia de inscripción respectiva.

En el caso, tanto la *DERFE* como el *PRD*, aportaron cédula electrónica de afiliación de los quejosos la cual, como se precisó previamente, es una documental privada, que se encuentra integrada por diversos elementos, a saber, **imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar** (frente y vuelta) y **firma manuscrita digitalizada** que fueron recabados a través de la aplicación móvil por el propio partido político; los cuales, *per se* no tiene una eficacia demostrativa plena, pero, apreciadas en su contexto y concatenadas con el acervo probatorio que obra en autos, de conformidad con los principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, podrían llevar a esta autoridad electoral a concluir la licitud de la afiliación discutida, por lo cual no se podría afirmar que dicho documento, sin prueba en contrario, carezca de validez alguna.

¹⁴⁹ Visible a foja 494 del expediente.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del *Reglamento*, el cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente a la *carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido político*, en concepto de este Consejo General las afirmaciones vertidas por los denunciantes referidos, son insuficientes para desvirtuar los elementos que obran en las *cédulas electrónicas* de afiliación que obran en autos, con las cuales se demuestra su afiliación voluntaria al partido denunciado, toda vez que aun cuando desconocen su afiliación al partido político denunciado, no realizaron manifestaciones suficientes en las que se advirtieran las razones concretas y específicas para restar o nulificar el valor probatorio de dichos documentos, pues no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la objeción y aportar en el momento procesal oportuno los elementos idóneos para acreditar su objeción, lo anterior, con la finalidad de invalidar la fuerza probatoria de la *cédula electrónica* de afiliación que obra en autos y que los quejosos tuvieron a la vista, por lo que no se cumple con lo establecido en el artículo 24, párrafos 2 y 3, del *Reglamento de Quejas*.

Por tanto, conforme a lo establecido en párrafos anteriores, debe concluirse que, las manifestaciones de las personas denunciantes resultan insuficientes para desvirtuar las afiliaciones contenidas en las *cédulas electrónicas*, las cuales como se precisó previamente cuenta con elementos mínimos de certeza que fueron previstos precisamente para asegurar que en las afiliaciones que los partidos políticos llevan a cabo de manera electrónica, se cuente con la manifestación de voluntad de las personas a las que se afilia.

Los razonamientos anteriores encuentran sustento en las razones esenciales de la Tesis de Jurisprudencia I.3o.C. J/11 de rubro *DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS* e *III.1o.C. J/29, de rubro DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)*.

Bajo esta óptica, si Jaime Helios Carbajal Gutierrez sostuvo la falsedad de la firma contenida en la cédula electrónica de afiliación que respaldaba su incorporación a las filas del *PRD*, asumió una carga probatoria para demostrar ese aserto, no sólo por la carga genérica que asumen las partes de probar cualquier afirmación que realicen, sino porque la falsificación de un hecho jurídico, *lato sensu*, (en el caso la firma cuestionada) resulta un evento extraordinario que debe justificarse por quien lo afirma, ya que implica un estado de cosas anormal que genera una duda

razonable sobre su realización, máxime, si se consideran las inferencias a las que arribó esta autoridad electoral a partir de la cadena de indicios y del material probatorio que obra en autos.

En conclusión, no existe evidencia objetiva que haga suponer que las afiliaciones de las personas denunciantes hayan sido producto de una acción ilegal por parte del *PRD*, pues como se dijo, la *cédula electrónica* de afiliación que obra en el expediente **no fue controvertida u objetada de manera frontal y directa por las personas denunciantes**, no obstante que estuvieron en la aptitud y garantía procesal de haberlo hecho, lo anterior, aunado a que como se precisó previamente dichas cédulas electrónicas, además de contener la firma manuscrita digitalizada, cuentan con la **imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar** (frente y vuelta).

En este sentido, al no haber una oposición suficiente, debidamente fundada y motivada por parte de las personas quejasas en relación con el documento recabado por el *PRD*, es válido colegir que los formatos son válidos como instrumentos probatorios al encontrarse en los mismos la **imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar** (frente y vuelta) y **firma manuscrita digitalizada** como prueba ineludible de su pretensión, lo que de suyo permite concluir que sí existió su voluntad para ser afiliadas al partido denunciado.

Por otra parte, al igual que se precisó en el apartado 1. *Subapartado relativo a los ciudadanos que no objetaron los formatos aportados por el PRD*, no pasa desapercibido para esta autoridad que existe **un error evidente en la captura de la información** por parte del partido político denunciado, el cual, recordemos, es el encargado de dar de alta las afiliaciones en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, toda vez que se asentó la fecha de registro del auxiliar (persona que realizó la afiliación) como si fuera el momento en que se concretó la afiliación.

Sin embargo, dicha cédula electrónica fue capturada a través de la aplicación establecida para dichos fines, la cual cuenta con diversos elementos que hacen que sea posible advertir la voluntad de las personas afiliadas al *PRD*, mediante dicha aplicación, a saber:

- Fotografía viva;
- Imagen de credencial de elector [anverso y reverso];
- Firma sobre la leyenda en la cual se otorga el consentimiento para el uso de sus datos personales con fines de afiliación.

Por tanto, la conclusión debe ser en el sentido de que, la diferencia que se advierte entre las fechas ya precisadas, en modo alguno desvirtúa la certeza que proporciona la constancia de afiliación ya analizada, documento que cuenta con elementos que generan convicción respecto de que los ahora quejosos realmente otorgaron su consentimiento para ser afiliados al partido político denunciado.

Ahora bien, más allá de que no se acreditó la infracción denunciada en el presente procedimiento, en el caso, es importante precisar que las personas denunciadas que se analizaron en el presente apartado alcanzaron su pretensión inicial, que consistía en ser dados de baja del registro del padrón de afiliados del *PRD*, pues de lo manifestado por el propio instituto político, de lo señalado por la *DEPPP* y del acta circunstanciada levantada por la *UTCE* se advierte que las mismas fueron dadas de baja del padrón de afiliados del partido denunciado.

Apartado B. Ciudadano a quien el *PRD* Sí conculcó su derecho de libre afiliación.

Como se precisó previamente, la *Sala Superior* al emitir la Jurisprudencia **3/2019**, de rubro ***DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO***, estableció que, si una persona denuncia una afiliación sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, **debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político.**

Por ende, de conformidad con lo sostenido por el máximo órgano jurisdiccional en la materia, el documento idóneo para acreditar que un ciudadano expresó su voluntad de afiliarse a un partido político, es la constancia de inscripción respectiva

Ahora bien, como quedó establecido en el apartado ***ACREDITACIÓN DE HECHOS***, de las constancias que obran en el expediente, respecto de **Manolo Diego Cantoriano**, se advierte lo siguiente:

1. **Manolo Diego Cantoriano** manifestó no haber otorgado su consentimiento para ser afiliado al *PRD*.
2. La *DEPPP* y el *PRD* informaron que el referido quejoso se encontró afiliado al denunciado.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

3. La *DERFE* y el *PRD* aportaron la *cédula electrónica* a nombre de **Manolo Diego Cantoriano**.
4. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con la *cédula electrónica*, que contiene sus datos, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de trece de septiembre del año en curso, se dio vista de alegatos, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que el quejoso hubiese formulado objeción alguna respecto de dicha documental.
5. De la revisión de la *cédula electrónica* a nombre de **Manolo Diego Cantoriano**, se advierte que la misma carece de firma autógrafa, como se advierte de la siguiente imagen:

INE Instituto Nacional Electoral



Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Acciones Políticas

Cédula del Expediente Electrónico de Afiliación, Refrendo o Ratificación de la ciudadanía como Militante de un Partido Político


DATOS DEL CIUDADANO		DATOS DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL	
Folio del registro:	F2000100000002-0003-143	Folio:	F2000100000002
Tipo de registro:	Afiliación Fecha: 2019-08-22 18:54:06	Partido político:	PRD
Situación registral:	[REDACTED]	Periodo de captación:	19000- AFILIACIÓN Y REFRENDO DE PARTIDOS POLÍTICOS FEDERALES (06-05-2019 12:00:00 - 31-03-2020 11:59:59)
Apellido paterno:	DIEGO	DATOS DEL RESPONSABLE REPRESENTANTE DEL PPN	
Apellido materno:	CANTORIANO	Apellido paterno:	[REDACTED]
Nombre(s):	MANOLO	Apellido materno:	SALAZAR
Clave de elector:	[REDACTED]	Nombre:	EDUARDO HUJIDO
Sección:	[REDACTED]	Clave de elector:	[REDACTED]
Domisilio:	[REDACTED]	CURP:	[REDACTED]

DATOS DEL MISMIAN			
Nombre completo:	GAUDENCIO CABALLERO	Clave de elector:	[REDACTED]
Correo electrónico:	[REDACTED]@gmail.com	Folio registro:	23-05-19 01:23:38
		Id. auxiliar:	[REDACTED]
		Id. dispositivo:	1

CREENCIAS PARA VOTAR

FOTOGRAFÍA Y FIRMA DEL CIUDADANO QUE BRINDA SU AFILIACIÓN



Atención: En que más veces, se han presentado para afiliarse al PRD, para tramitar el INE para verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en materia de afiliación de partido político. Manifestando el ciudadano sobre el individuo de afiliarse al PRD. Ciudadano que pretende de decir verdad que los datos proporcionados son ciertos y que por ello está dispuesto a sustentar afirmación propia a algún partido político con registro a un proceso de formalización. Agradece que el INE del AVISO DE PRIVACIDAD del PRD se ha informado la información y características principales del tratamiento de que usted proporciona sus datos personales.

En mérito de lo anterior, esta autoridad electoral considera que toda vez que dicha *Cédula* carece de firma manuscrita digitalizada, **sí** existe una vulneración al derecho de libre afiliación de **Manolo Diego Cantoriano** y, por tanto, **sí** se utilizaron sin autorización sus datos personales, por las razones siguientes:

Como se precisó previamente a efecto de acreditar la debida afiliación de **Manolo Diego Cantoriano** el *PRD* aportó la *cédula electrónica* a fin de acreditar que el registro de dicha persona aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que, además, para llevar a cabo ese trámite cumplió con los requisitos establecidos, para tal efecto, documental que, a su vez, fue proporcionada por la *DERFE*.

Al respecto es importante precisar que dicha *cédula electrónica* fue recabada mediante la aplicación móvil desarrollada por este Instituto, la cual se encuentra regulada por los *LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL QUE PERMITE RECABAR LOS DATOS E INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE ACREDITE LA VOLUNTAD DE LA CIUDADANÍA PARA AFILIARSE, RATIFICAR O REFRENDAR SU MILITANCIA A UN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL*, que en lo conducente establecen lo siguiente:

...

Tercero

Glosario

1. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

...

e) Cédula o Manifestación: Documento físico o digital que acredita la afiliación, ratificación o refrendo de la ciudadanía a un partido político, el cual debe contener como requisitos mínimos: nombre completo; clave de elector; fecha de afiliación; domicilio completo; y, la manifestación expresa de querer afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un Partido Político Nacional; a través de la firma manuscrita digitalizada, así como los demás elementos previstos en la normativa interna de cada Partido Político Nacional.

...

p) Expediente electrónico: Conjunto de archivos captados por la aplicación móvil que acreditan la voluntad de la ciudadanía de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un Partido Político Nacional, el cual está conformado por las imágenes correspondientes al anverso y reverso de la Credencial para Votar original, fotografía viva de la o el ciudadano y la firma manuscrita digitalizada de la o el ciudadano.

q) Firma manuscrita digitalizada: Aquella plasmada por la o el ciudadano en la pantalla de un dispositivo móvil, para manifestar su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN.

...

Sexto

De las Obligaciones

...

2. Los PPN, que requieran el uso de la aplicación, tendrán las obligaciones siguientes:

...

e) Remitir, a través de sus auxiliares acreditados, la información captada por medio de la aplicación móvil al servidor central del INE.

...

h) Actualizar el Sistema de Verificación con las nuevas afiliaciones captadas con la aplicación móvil y aprobadas conforme a la normativa estatutaria, a efecto de respetar el derecho de libre afiliación de la ciudadanía y llevar a cabo el procedimiento establecido en el Acuerdo INE/CG85/2017.

...

Décimo Primero

De la obtención de datos a través de la aplicación móvil

1. La o el auxiliar ingresará a la aplicación móvil para recabar los datos que acrediten la voluntad de la ciudadanía de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia al PPN, para lo cual, seleccionará el módulo “afiliación” o “refrendo” según corresponda.

2. La información correspondiente al PPN que se mostrará en la aplicación móvil es la siguiente:

a) Nombre.

b) Emblema.

c) Manifestación de voluntad de afiliación, ratificación o refrendo y aviso de privacidad.

3. Para las nuevas afiliaciones, se tomará como fecha de afiliación el día en que se lleve a cabo la captación de los datos en la aplicación móvil. En caso de ratificación o refrendo de la militancia, la o el auxiliar deberá seleccionar el mes y año de la fecha de afiliación que manifieste la o el ciudadano, y el sistema asignará de forma predeterminada el día uno del mes que se señale en la aplicación móvil, únicamente en caso de que no exista información en el padrón de militantes del PPN de que se trate.

4. La o el auxiliar identificará visualmente y seleccionará en la aplicación móvil el tipo de Credencial para Votar que emite este Instituto y que la o el ciudadano presente en original al manifestar su voluntad de afiliación, ratificación o refrendo al PPN.

5. La o el auxiliar, a través de la aplicación móvil, capturará la fotografía del anverso y reverso del original de la Credencial para Votar de la o el ciudadano que manifieste su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN.

6. La o el auxiliar deberá seleccionar la opción que corresponda a la presentación de la Credencial para Votar original que la o el ciudadano exhiba en ese momento para captar los datos de la ciudadanía. De no ser así, no podrá avanzar con la siguiente etapa del proceso de captación de datos.

7. La o el auxiliar deberá verificar que las imágenes captadas sean legibles; particularmente por lo que hace a la fotografía, la clave de elector, la firma, el OCR o el CIC.

8. La aplicación móvil captará el código QR o el código de barras de una dimensión, según el tipo de Credencial para Votar del que se trate, a efecto de obtener el CIC o el OCR de la Credencial para Votar de la o el ciudadano que manifieste su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN.

9. La o el auxiliar visualizará a través de la aplicación móvil los datos obtenidos del proceso de captura, mismos que no serán editables.

10. La o el auxiliar solicitará a la o el ciudadano la captura de la fotografía de su rostro a través de la aplicación móvil, a efecto de que esta autoridad cuente, en su caso, con los elementos necesarios para constatar la voluntad de la ciudadanía de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un PPN. En caso de negativa de la o el ciudadano, no podrá continuar con el procedimiento de obtención del expediente electrónico.

11. La o el auxiliar solicitará a quien exprese su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia, **que ingrese su firma manuscrita digitalizada a través de la aplicación móvil en la pantalla del dispositivo**. En caso de la ratificación o refrendo, al firmar la manifestación, la o el ciudadano declarará estar de acuerdo con que la fecha ingresada en la aplicación móvil contará como tal, únicamente cuando no se encuentre otra fecha en el padrón de militantes del PPN, en atención a lo señalado en el Considerando 12, numeral 3 del Acuerdo INE/CG33/2019.

12. Una vez concluidos los pasos anteriores, al seleccionar el botón “siguiente”, la aplicación móvil guardará de manera exitosa el registro, mostrando un mensaje con el número de folio guardado. La o el auxiliar deberá seleccionar “continuar” para seguir utilizando la aplicación.

13. Es responsabilidad de cada PPN la obtención, resguardo y tratamiento de datos de acuerdo con los presentes Lineamientos.

Capítulo V

Del expediente electrónico generado a través de la aplicación móvil

Décimo Cuarto

De los elementos del expediente electrónico

1. El expediente electrónico, es el conjunto de archivos captados por la aplicación móvil que acreditan la voluntad de la ciudadanía de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia.

2. El expediente electrónico generado por medio de la aplicación móvil, se integra por las imágenes siguientes:

- a) Anverso de la Credencial para Votar original.
- b) Reverso de la Credencial para Votar original.
- c) Fotografía viva de la o el ciudadano.
- d) Manifestación de la voluntad de afiliación, ratificación o refrendo, a través de la firma manuscrita digitalizada de la o el ciudadano.**

3. Con los datos captados del original de la Credencial para Votar, la DERFE obtendrá la información relativa a:

- a) Apellidos paterno y materno, nombre (s).
- b) Domicilio completo (calle, número, colonia, alcaldía o municipio y entidad).
- c) Clave de elector.

4. Además de las cuatro imágenes y los datos que se obtienen del original de la fotografía de la Credencial para Votar, la fecha de ratificación o refrendo de la militancia deberá ser seleccionada por la o el auxiliar en el campo previsto en la aplicación móvil, conforme la fecha que indique la o el ciudadano, la cual deberá estar compuesta por mes y año. **Lo anterior, en consonancia con la voluntad expresada por la o el ciudadano mediante la suscripción de la leyenda siguiente:**

“Manifiesto mi voluntad libre e individual de ratificar o refrendar la militancia al (NOMBRE DEL PARTIDO). Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados son ciertos y solicito se reconozca mi antigüedad de afiliación con la fecha asentada por este acto únicamente en caso de no existir información en el padrón.”

...

6. La DERFE entregará al PPN las imágenes que integran el expediente electrónico y datos de las compulsas realizadas que correspondan a los registros encontrados en el padrón electoral y sin inconsistencias captados por la aplicación móvil. Una vez que la DERFE entregue al PPN la información correspondiente, en términos del protocolo de seguridad que se implemente, el INE eliminará del servidor la información captada a través de la aplicación móvil.

7. El expediente electrónico que se genere, a partir de la aplicación móvil, no sustituye a la cédula, constancia o manifestación formal de afiliación; únicamente permite integrar los requisitos mínimos que deberá contener la cédula de afiliación, misma que además contendrá los elementos que cada PPN determine conforme a su normativa interna.

...

Énfasis añadido

De lo anterior se advierte que:

1. La *Cédula electrónica* [Expediente electrónico] es el conjunto de archivos captados mediante la aplicación móvil para acreditar la voluntad de la ciudadanía de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un partido político.
2. Dicha *Cédula electrónica* debe contener requisitos mínimos como son:
 - a. Imágenes de la Credencial para Votar original, por ambos lados.
 - b. Fotografía viva de la o el ciudadano.
 - c. Firma manuscrita digitalizada, la cual es plasmada por la o el ciudadano en la pantalla de un dispositivo móvil, para manifestar su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un Partido Político Nacional.

3. Dicha información es captada por medio de la aplicación móvil y remitida al servidor central de este Instituto, mediante los auxiliares de los Partidos Políticos Nacionales acreditados para dicho efecto.

En ese sentido, es válido concluir que la afiliación de **Manolo Diego Cantoriano** no se realizó de forma debida, ya que, si bien el *PRD* aportó la *cédula electrónica* para acreditar su debida afiliación, dicho documento no cumple con uno de los requisitos mínimos previstos en los referidos Lineamientos, ya que no cuenta con firma manuscrita digitalizada.

Por tanto, a consideración de este órgano resolutor, el documento exhibido por el partido político denunciado, no es válido para acreditar la debida afiliación de **Manolo Diego Cantoriano**.

En esta línea argumentativa, debe recalcar el hecho de que los partidos políticos son entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral.

En consecuencia, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que las afiliaciones que realizan, sean de manera libre, voluntaria y personal y, como consecuencia de ello, conservar y resguardar y, en su caso, exhibir la documentación soporte en la que conste la afiliación libre y voluntaria de sus militantes, puesto que, se insiste, le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Por tanto, si bien el *PRD* aportó *cédula electrónica* a nombre de **Manolo Diego Cantoriano**, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de la persona quejosa aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto, lo cierto es que, se reitera, **dicho documento no se considera como válido** por los motivos antes expresados.

Lo anterior, es así, ya que a sabiendas que debía captar la firma manuscrita digitalizada, a efecto de acreditar la voluntad del ciudadano de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un Partido Político Nacional, de conformidad con los

requisitos que contempla el llenado del formato a través de la aplicación móvil, llevó a cabo actos que merman su credibilidad, toda vez que, si bien dicha cédula cuenta con el anverso y reverso de la credencial para votar del quejoso y con una fotografía viva del denunciante, la misma carece de firma manuscrita digitalizada, lo cual vulnera los parámetros mínimos establecidos para dar certeza de la voluntad del denunciante de afiliarse a dicho instituto político.

En mérito de todo lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación de **Manolo Diego Cantoriano** fue producto de una acción ilegal por parte del **PRD**.

Por lo que, este órgano colegiado tiene **por acreditada la infracción** en el presente procedimiento, pues se concluye que el **PRD** infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida—, de **Manolo Diego Cantoriano**, quien apareció como afiliado a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de esta persona para ser registrada como militante de ese partido.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia **3/2019**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO**.

Así pues, el **PRD**, no demostró que la afiliación de la persona denunciante se realizara a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dicha persona haya dado su consentimiento para ser afiliada, ni mucho menos que haya permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar la afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de la persona denunciante de haberse afiliado al **PRD**, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de medios de prueba idóneos, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de la persona promovente, lo que no hizo.

Es decir, no basta con que la persona quejosa aparezca como afiliada al **PRD** en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o **pruebas idóneas**, que dicha afiliación se realizó de forma

libre o voluntaria, cumpliendo para ello con los requisitos establecidos por este Instituto para el uso de la aplicación móvil, lo cual no ocurrió en el caso en estudio.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al **PRD** implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a la persona quejosa.

Entonces, podemos afirmar que el uso indebido de datos personales tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de **Manolo Diego Cantoriano** y, como consecuencia de ello, merece la imposición de la sanción que se determinará en el apartado correspondiente.

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que el denunciado manifestó, en lo conducente, que debe considerarse procedente la afiliación de **Manolo Diego Cantoriano**, ya que, si bien no cuenta con la firma digitalizada, sí cuenta con foto viva, aunado a que el quejoso fue omiso en dar respuesta a la vista formulada, por lo que precluyó su derecho y al no haber realizado manifestaciones por la falta de firma se debe considerar consentido el acto.

Señala que si bien existe una inconsistencia en el expediente electrónico relativo a **Manolo Diego Cantoriano** el mismo debe considerarse como válido ya que ya había sido validado por la *DERFE*.

Refiere que la validez de la inconsistencia por la falta de firma digitalizada es consecuencia de un error insuperable -humano- como lo señala la *DERFE* es decir que dicho error fue por posibles situaciones presentadas en la captación de los datos por las funcionalidades alternas del dispositivo móvil con el que fue captado el elemento -firma digitalizada- y de la verificación realizada en mesa de control, quedando fuera del alcance del auxiliar y de ese instituto político.

Respecto a los argumentos señalados por el partido denunciado relativos a que la cédula debe tenerse por válida ya que cuenta con foto viva del quejoso y que no fue objetada por el mismo, se considera que no le asiste la razón al denunciado, ya que, como se precisó previamente las *cédulas electrónicas* captadas mediante la aplicación móvil desarrollada por este Instituto, deben contener requisitos mínimos para acreditar la debida afiliación de los ciudadanos, entre los que se encuentra la firma manuscrita digitalizada, lo cual no acontece en el presente caso y por tanto al

no cumplir con uno de los requisitos mínimos previstos en los Lineamientos, la misma no debe ser considerada como un documento válido para acreditar la debida afiliación del denunciante que se analiza en el presente apartado.

Por otra parte, si bien, como lo señala el denunciado, dicha cédula no fue objetada por el quejoso, esta autoridad cuenta con la facultad de verificar si los documentos presentados por el denunciado cuentan con todos los elementos que otorgan certeza de que los ciudadanos manifestaron su voluntad de afiliarse al partido político, de conformidad con los referidos Lineamientos, lo que en el caso no acontece, pues como se precisó previamente la misma carece de firma manuscrita digitalizada, en ese sentido, este órgano colegiado no cuenta con certeza respecto de la voluntad del quejoso de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia al partido político denunciado.

Lo anterior es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior* al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-261/2022, en el que resolvió, en lo conducente:

El agravio se estima infundado puesto que como se mencionó el partido político se sujetó a lo dispuesto en el numeral 1, inciso r) del Capítulo I, Disposiciones Generales de los Lineamientos que regulan el uso de la Aplicación Móvil que permite recabar los datos e integrar el expediente electrónico que acredite la voluntad de la ciudadanía a Afiliarse, Ratificar o Refrendar su militancia a un partido político aprobados mediante acuerdo INE/CG231/2019.

En dichos lineamientos se establece la captura de la fotografía del rostro a través de la aplicación móvil, a efecto de que la persona quien está ante la autoridad exprese su voluntad de afiliación manifestando a través de su firma manuscrita digitalizada su voluntad de afiliarse, ratificar o refrendar de manera libre e individual su militancia.

Lo infundado del agravio radica en que, si bien la autoridad electoral revisó la fotografía viva, sin que estuviera objetada por el denunciante, se estima que ello se debió con la finalidad de verificar si se contaba con todos los elementos que otorgaran certeza de que la persona que presenta su credencial para votar expedida por el INE manifiesta su voluntad de afiliarse al partido político, de conformidad con los Lineamientos referidos.

Así, la autoridad tuvo por acreditada la infracción y precisó que, dado que no existía un acto volitivo del denunciante de ser afiliado a ese instituto político, no podía eximir la responsabilidad del PRD ni atenuar la falta cometida por una omisión en la detección de una cédula inconsistente.

Énfasis añadido

Ahora bien, respecto a lo señalado por el denunciado, relativo a que la cédula debe considerarse como válida ya que fue validada por la *DERFE* y que la falta de la

misma se debe a un error insuperable -humano- es decir que dicho error fue por posibles situaciones presentadas en la captación de los datos por las funcionalidades alternas del dispositivo móvil con el que fue captado el elemento -firma digitalizada- y de la verificación realizada en mesa de control, quedando fuera del alcance del auxiliar y de ese instituto político.

Al respecto, se considera que no le asiste la razón al denunciado, ya que, si bien la *DERFE* señaló que, si bien el registro no fue catalogado con inconsistencia, aun cuando carece de la firma autógrafa digitalizada, *“puede ser atribuible a un error humano involuntario, en la revisión de registros en la mesa de control”*

Dicha Dirección Ejecutiva, también señaló, lo siguiente:

...

Cabe comentar que, el numeral 7 del capítulo V. Del expediente electrónico generado a través de la aplicación móvil de los Lineamientos previamente referidos, así como en la cláusula 8.6 del Anexo Técnico Número uno al Convenio Específico de Apoyo y Colaboración suscrito con el PRD, para el uso de la Aplicación Móvil establece lo siguiente:

“El expediente electrónico que se genere, a partir de la aplicación móvil, no sustituye a la cédula, constancia o manifestación formal de afiliación; únicamente permite integrar los requisitos mínimos que deberá contener la cédula de afiliación, misma que además contendrá los elementos que cada PPN determine conforme a su normativa interna”.

De ahí que, las cédulas de expediente electrónico que proporciona la Dirección de Productos y Servicios Electorales, únicamente concentran los elementos que fueron captados por las y los auxiliares dados de alta por el Partido de la Revolución Democrática, a través de la Aplicación Móvil y que como resultado de la compulsas se obtenga como situación registral en el Padrón Electoral, por lo que la determinación de la validez final de los registros captados, conforme a la información y testigos visuales que proporciona este Instituto corresponde a cada uno de los Partidos Políticos, conforme a sus estatutos.

...

En ese sentido, que dicho registro hubiera considerado como válido en mesa de control, no excluye de responsabilidad al partido político denunciado, ya que, como se indicó, la *cédula electrónica* presentada para acreditar la debida afiliación de **Manolo Diego Cantoriano** carece de firma autógrafa digitalizada, por lo que incumple con los requisitos mínimos establecidos en los multirreferidos Lineamientos aprobados para tal efecto, por lo que, una omisión en la detección de una cédula inconsistente por parte de la autoridad electoral, bajo ninguna circunstancia, puede eximir al partido denunciado de responsabilidad o atenuar la falta cometida.

En efecto, no debe perderse de vista que los sujetos obligados para la carga de la información proveniente de las afiliaciones obtenidas, son los propios institutos políticos, quienes, en todo momento y sin excepción alguna, deben conducir sus actividades por los causes legales, es decir, para el caso, llenar debidamente las cédulas de afiliación obtenidas a través de la aplicación móvil, con todos y cada uno de los requisitos que en dicha norma se establecen, sin que sea válido que por la falta de detección por parte de la autoridad revisora, pueda determinarse una responsabilidad compartida o una eximente de responsabilidad, como se dijo párrafos arriba.

8. CASO CONCRETO EN RELACIÓN AL POSIBLE EJERCICIO INDEBIDO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL *PRD* DE NOMBRAR A LA QUEJOSA COMO SU REPRESENTANTE ANTE MESA DIRECTIVA DE CASILLA.

Previo al análisis detallado de la infracción aducida por la quejosa, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LG/PE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, un **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra, su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

Ahora bien, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, la autoridad debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar la responsabilidad, así como la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

Ahora bien, al igual que el derecho de afiliación, **la libertad de participación política es un derecho reconocido y así garantizado para toda la ciudadanía de nuestro país.** Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el apartado de *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO.*

Precisado lo anterior, de las constancias que obran en el expediente se advierte que el Vocal Secretario de la 07 Junta Distrital Ejecutiva y el Titular de la *DEOE* informaron que el *PRD* sí acreditó a Marisol Ramírez Gómez como representante propietaria 1 ante Mesa Directiva de Casilla, para el Proceso Electoral 2017-2018, en la sección 1267, casilla C6, del 07 Distrito Federal en el estado de Guerrero.

Asimismo, se encuentra agregados en el expediente copias certificadas de la *CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL* y del *Reporte de Listado de información del registro de representantes ante casilla*, correspondientes a la sección 1267, casilla C6, del 07 Distrito Federal en el estado de Guerrero, en las que se observa el nombre de Marisol Ramírez Gómez.

Documentos que constituyen documentales públicas en términos del artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, así como a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado; por tanto, tienen valor probatorio pleno, al no encontrarse controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.


CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

En tal virtud, dichos medios de convicción, concatenados entre sí y valorados tanto en lo individual como en su conjunto, se estiman suficientes, idóneos y pertinentes para acreditar la licitud de la conducta denunciada, ya que generan convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*.

Por tanto, este *Consejo General*, de conformidad con los principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, puede concluir sobre la licitud de la designación discutida, ya que fue el resultado de la manifestación libre y voluntaria de la denunciante, la cual, quedó constatada con la firma autógrafa que obra en la **CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL**.

En efecto, para dar mayor claridad a la anterior conclusión, se insertan las imágenes **CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL** y del *Reporte de Listado de información del registro de representantes ante casilla*, de los cuales se advierte que Marisol Ramírez Gómez fue acreditada por el **PRD**, así como de su participación como representante ante Mesa Directiva de Casilla:

Reporte de Listado de información del registro de representantes ante casilla

<div>  <div> <div>Proceso Electoral 2017 - 2018</div> <div>Reporte del Listado de información del registro de representantes ante casillas</div> </div> </div>													
											Fecha y hora de generación: 20/05/2018 09:25:33 hrs.		
Partido Político/Candidatura	Sección Casilla Capturado Por	Nombre	Clave de Elector	Ámbito Federal	Ámbito Local	Calidad representante	Estatus	Observaciones	Acreditado	Motivo	Derecho a votar	Fecha y hora de registro	Remuneración
PRD	1267	Independiente	MARISOL RAMÍREZ GÓMEZ			PROPRIETARIO	1	Observaciones	Si			16/06/2018 17:00:12	400

CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL

Como se puede observar, de dichas constancias se advierte que el *PRD* registró a Marisol Ramírez Gómez como representante propietario 1, ante Mesa Directiva de Casilla, en la sección 1267, casilla C6, del 07 Distrito Federal en el estado de Guerrero y que Marisol Ramírez Gómez firmó la *CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL*, correspondiente a la referida casilla, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo que permite concluir su participación activa en la jornada electoral como representante de mesa directiva de casilla del *PRD*.

Por lo anterior, en concepto de esta autoridad electoral, tales medios probatorios son suficientes para sustentar la designación de la denunciante como representante de mesa directiva de casilla y que para ello dio su consentimiento para fungir con tal carácter, tan es así que en la *Constancia de Clausura* respectiva se advierte la firma de la quejosa, lo que permite desprender de manera indubitable la manifestación de la voluntad de la quejosa, pues el hecho de que obre este

elemento, demuestra la aprobación libre de la ciudadana para ser designada en el cargo partidista aludido.

En este tenor, se reitera que, toda vez que existe un documento que contiene la firma autógrafa de la denunciante, en tanto elemento necesario para dotar de eficacia al mismo, permite demostrar la libre voluntad de la persona de ser designada como representante del partido denunciado, porque la rúbrica o firma autógrafa de la designada, es el elemento que, por antonomasia, respalda la presencia manifiesta de la voluntad y, por ello, ese dato constituye un elemento esencial.

Ahora bien, con la finalidad de respetar el principio de contradicción y la respectiva garantía de audiencia de la quejosa, durante la sustanciación del procedimiento se ordenó dar vista con la *CONSTANCIA DE CLAUSURA DE CASILLA Y REMISIÓN DEL PAQUETE ELECTORAL AL CONSEJO DISTRITAL* respectiva, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera.

De las constancias de autos se advierte que la persona denunciante fue omisa en responder a la vista formulada, mediante la cual se le corrió traslado de la constancia referida respectiva, por lo que hizo nulo su derecho de desvirtuar los medios de prueba exhibidos.

En efecto, de lo antes referido, es posible advertir de las constancias de autos que, aun cuando la quejosa tuvo la oportunidad procesal de objetar la autenticidad y contenido del documento en cuestión, se abstuvo de cuestionarlo, pues no se apersonó al procedimiento a formular manifestación alguna en ese sentido, de lo que se puede colegir que existe un reconocimiento tácito de ésta de haber suscrito y firmado ese documento, lo que de suyo permite colegir que existió su voluntad para ser designada como representante de mesa directiva de casilla del *PRD*.

En conclusión, a partir de los razonamientos establecidos en los apartados previos, esta autoridad considera que la designación de **Marisol Ramírez Gómez** como representante de mesa directiva de casilla del *PRD* fue apegada a derecho.

Lo anterior es así, porque conforme a lo antes razonado, la actualización del tipo administrativo en estudio tiene como elementos constitutivos: i) una designación del partido político que se traduce en el acto de afiliación formal y, ii) la falta de consentimiento libre de la ciudadana para ser ligada a un partido político como su representante ante mesa directiva de casilla.

En este sentido para colmar la hipótesis normativa, resultaba necesario que concurriera la acreditación de los dos elementos referidos, lo que no sucedió en el particular.

Es decir, en el caso debió demostrarse fehacientemente no solamente la designación de la ciudadana como representante ante mesa directiva de casilla del *PRD*, sino también la ausencia de voluntad de ésta para ser nombrada con ese carácter, en razón de que el núcleo del tipo administrativo en estudio lo constituye la libertad de asociación, de ahí que si en la especie solamente se justificó la designación como representante de la quejosa sin evidenciar la ausencia de voluntad de la misma en ese acto, entonces, es inconcuso que no se colmó el tipo administrativo sujeto a escrutinio.

De igual manera, por las razones expuestas con antelación, tampoco se actualizó la hipótesis descrita en el numeral 29 de la *LGPP*, ya que al concluirse que la *quejosa* quiso ser representante de mesa directiva de casilla del *PRD* libremente, por mayoría de razón debe afirmarse que dicho denunciado no utilizó indebidamente la información y datos personales del impetrante, porque éste, en su oportunidad proporcionó esa información y documentos.

En suma, al no acreditarse uno de los extremos en que se finca el procedimiento sancionador, específicamente la falta de voluntad de ser designada como representante ante mesa directiva de casilla, se concluye la inexistencia del tipo administrativo, por lo que no procede imponer al *PRD* sanción alguna.

Es por ello que, **no se tiene por acreditada la infracción** consistente en el indebido ejercicio de un derecho constitucional y legal del *PRD* de acreditar a una persona como representante ante mesa directiva de casilla, sin el consentimiento de ésta, así como el uso de sus datos personales para tal fin, por los argumentos antes expuestos.

QUINTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta denunciada, así como la responsabilidad del *PRD*, en el caso detallado en el considerando que antecede se procede ahora determinar la sanción correspondiente.

En relación con ello, la *Sala Superior* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
PRD	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> y la <i>LGIPE</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la violación a la libre afiliación en su modalidad positiva (afiliación indebida) y el uso no autorizado de los datos personales de 1 ciudadano , por parte del PRD	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de las y los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el PRD incluyó en su padrón de afiliados a **Manolo Diego Cantoriano**, sin demostrar que para incorporarlo medió la voluntad de dicho ciudadano de inscribirse en el, violentando con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas radica en garantizar el derecho de las y los ciudadanos

mexicanos de optar libremente en ser o no militantes de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza al respecto.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada, se usaron los datos personales del promovente, sin que éste hubiese otorgado su consentimiento para ello.

Lo anterior, ya que, lógicamente se utilizaron datos personales como lo son, al menos el nombre y la clave de elector de dicho ciudadano para ser afiliado, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus datos personales se constituya como un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos del actor al padrón de militantes del *PRD*.

Por tanto, esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PRD*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, se considera que existe singularidad de la falta pues aun cuando se acreditó que *el PRD* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, esta situación no conlleva a estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación, en su vertiente positiva, ya que el instituto político denunciado incluyó en su padrón de militantes al quejoso, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a) **Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PRD* consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, Base I, de la *Constitución* 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*, en su vertiente positiva, al incluir en su padrón de afiliados a un ciudadano respecto del que no se acreditó fehacientemente con la documentación soporte su voluntad de pertenecer a las filas del *PRD* en el cual se encontró incluido tal y como se advirtió de forma pormenorizada a lo largo de la presente resolución.

b) **Tiempo y lugar.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, la afiliación indebida aconteció, conforme a lo siguiente:

Ciudadano	Entidad	Fecha de afiliación conforme a lo señalado por la DEPPP
Manolo Diego Cantoriano	Guerrero	23/05/2019

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PRD*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, Base I, de la *Constitución Federal*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PRD* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero; 35, fracción III, y 41, párrafo tercero, Base I, de la *Constitución Federal*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- *El PRD* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadana y ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político tiene la **obligación de respetar la libre afiliación o desafiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III; 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa porque:

- 1) El quejoso alude que en momento alguno solicitó voluntariamente su registro o incorporación como militante del PRD; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
- 2) Quedó acreditado que el quejoso apareció en el padrón de militantes del PRD, conforme a lo informado por el propio denunciado.
- 3) El partido político denunciado no demostró con las pruebas idóneas, que la afiliación del quejoso se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de la denunciante.
- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación del quejoso fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de la parte quejosa fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.
- 5) La afiliación se realizó durante la vigencia del acuerdo INE/CG33/2019
- 6) cancelación del registro de afiliación ocurrió fuera de los plazos establecidos en el acuerdo INE/CG33/2019.

Sobre estos dos últimos puntos, debe tenerse presente que en términos de las previsiones establecidas en el acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos tenían la obligación de llevar a cabo la revisión de sus padrones, en el entendido de que, de no contar con la documentación soporte, debían reservar dichas afiliaciones a fin de intentar conseguir el refrendo o ratificación por parte del militante.

Bajo esa lógica y de conformidad con las razones que motivaron la instrumentación del citado acuerdo, todas aquellas afiliaciones obtenidas por los partidos políticos con fecha posterior al veintitrés de enero de dos mil diecinueve, es decir, aquellas consideradas nuevas, debían, indefectiblemente, contar con los documentos comprobatorios de la libre voluntad de afiliación, ya que la facultad de reservar el registro, solo estaba previsto para los casos derivados del padrón existente a la fecha de emisión del acuerdo; sin embargo, como ya se mencionó, en el caso que nos ocupa, el partido no reservó la afiliación de la persona quejosa, ni mucho menos acompañó la documentación comprobatoria.

De ahí que esta circunstancia sea relevante para la presente individualización, habida cuenta que esa omisión pone de manifiesto el actuar indebido del denunciado, aún y cuando tenía conocimiento de la obligación contraída, primero de contar con la documentación soporte de la libre voluntad de las partes denunciantes de ser su militantes, de conformidad con la obligación constitucional y legal que se le impone, y luego, derivado del conocimiento que tuvo sobre los alcances de la suscripción del acuerdo INE/CG33/2019, y de la necesidad y compromiso de regularizar su padrón de personas afiliadas, en los términos impuestos en este acuerdo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PRD* se cometió al afiliar indebidamente al quejoso, sin demostrar el acto volitivo del mismo, tanto de inscribirse en su padrón de militantes, como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de la ciudadanía mexicana y que la conducta se acredita ante la ausencia de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de la parte denunciante de militar en el *PRD*.

Además, como se indicó, a partir de la emisión del Acuerdo INE/CG33/2019; el denunciado, **ya tenía la obligación de contar con la documentación que justificara la incorporación de la persona denunciante a su padrón de afiliados o, en su caso, eliminarlo del mismo**; sin embargo, en el caso que nos ocupa, no acompañó dicha documentación comprobatoria a ninguna de sus intervenciones procesales, circunstancia relevante para el caso que nos ocupa, que será tomada en consideración al momento de seleccionar la sanción aplicable al caso concreto.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Existe reincidencia, puesto que, de conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la LGIPE, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado ordenamiento legal, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**¹⁵⁰

¹⁵⁰ Consultable en: <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWor>

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

Precisado lo anterior, debe decirse que, en los archivos de esta autoridad administrativa electoral, se encuentra la resolución identificada con la clave **INE/CG30/2018¹⁵¹ de veintidós de enero de dos mil dieciocho**, en el procedimiento sancionador ordinario **UT/SCG/Q/PT/JD16/VER/23/PEF/38/2015**, misma que fue impugnada por el **PRD** y confirmada mediante sentencia dictada por la *Sala Superior* en el recurso de apelación identificado con la clave **SUP-RAP-16/2018, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho**.

Con base en ello, y tomando en consideración que la afiliación indebida de **Manolo Diego Cantoriano**, fue realizada **veintitrés de mayo de dos mil diecinueve**, esto es, con posterioridad al dictado de la referida resolución, se estima que **en el caso sí existe reincidencia**.

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de

¹⁵¹ Consultable en: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94846/CGex201801-22-rp-1-2.pdf>

infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva, del ciudadano por parte del partido político denunciado, pues se comprobó que el *PRD* afilió a **una** persona, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, en cuanto a que medió la voluntad de la misma de pertenecer o estar inscrita a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer o permanecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación del denunciante, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PRD*.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- Existe reincidencia por parte del *PRD*.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el PRD como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación del quejoso, lo que constituye una violación a su derecho fundamental de libre afiliación reconocido en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 456, párrafo 1, inciso a) ,de la *LGIPE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMA's); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, **entre otras** cuestiones, la gravedad de la conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor, y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz también de lo establecido en el artículo 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, con el criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis **XLV/2002**, de rubro

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, **éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.**

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) **está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que converjan en un caso determinado**, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

Esto es, el *INE*, en estricto acatamiento del principio de legalidad, **está obligado** al análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la *LGIPE*, en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a soslayar el vocablo “entre otras”, inserto en artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, y la tesis antes señalada y consecuentemente, a no administrar una justicia **completa**, contrariamente a lo previsto por la Norma Fundamental.

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en diversas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación como el que ha quedado demostrado a cargo del *PRD*, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*, el cual se encuentra replicado en el

diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIFE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada ciudadana y ciudadano sobre quienes se cometió la falta acreditada.**

Sin embargo, es preciso no perder de vista que, como se refirió en el Considerando denominado “Efectos del acuerdo del *Consejo General INE/CG33/2019*” tanto esta máxima autoridad electoral administrativa como los propios partidos políticos, entre ellos el *PRD*, advirtieron que la violación del derecho de libertad de afiliación que dio lugar a los precedentes a que se refiere el párrafo anterior, subyace un problema de mayor extensión, reconociendo la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliados, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

Ante tales circunstancias, y de conformidad con las previsiones establecidas en el citado Acuerdo, se implementó un procedimiento extraordinario de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar, en un breve período, que solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de quienes, además, los institutos políticos cuenten con el soporte documental atinente a la militancia.

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la violación al derecho fundamental ciudadano a decidir si desean o no militar en una fuerza política, además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en cumplimiento al principio de certeza electoral.

Por estas razones, en dicha determinación, se establecieron plazos específicos para que los partidos políticos cumplieran su obligación de tener padrones de militantes debidamente integrados.

Siendo que en la etapa de Consolidación de Padrones se establecieron las siguientes obligaciones:

Los PPN realizarán los ajustes finales a los padrones, con la finalidad de que solamente contengan los nombres de las personas respecto de las cuales se cuente con el documento que avale la afiliación o ratificación de la misma, así como la identidad de los mismos, con

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

*los publicados en la página de Internet del INE. Esta etapa deberá concluirse a más tardar el **treinta y uno de enero de dos mil veinte**.*

Destacándose que en términos del Acuerdo **INE/CG33/2019**, esta etapa de ratificación concluiría a más tardar al **treinta y uno de enero de dos mil veinte**.

Además, es de suma importancia destacar que el citado Acuerdo implicó para todos los partidos políticos nacionales, aparte de la baja de los ciudadanos hoy quejosos de sus padrones de afiliados, una serie de cargas y obligaciones de carácter general, tendentes a depurar sus listados de militantes y, a la par, inhibir los registros de afiliaciones que no encuentren respaldo documental sobre la plena voluntad y consentimiento de cada ciudadano.

En sintonía con lo expuesto, en ese acuerdo se estableció que el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los partidos políticos podría tomarse en cuenta como atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar acreditada la infracción en los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias particulares de cada expediente.

No obstante, en el caso concreto, es importante tomar en cuenta que existen circunstancias particulares de las que se puede concluir que no se ubican en la hipótesis anterior.

Ello, evidentemente denota una conducta dolosa por parte del denunciado, de infringir el acuerdo adoptado al que se refieren los párrafos precedentes, en contravención a la razón que subyacía a su aprobación, que es precisamente contar con padrones de militantes que dotaran de certeza a la autoridad electoral y a la ciudadanía en general sobre la integración de sus registros de agremiados, en beneficio del derecho de libre afiliación que deben observar todos los institutos políticos.

Por ello, esta autoridad considera que previo a determinar la sanción que corresponde al *PRD* por la comisión de la infracción que ha sido materia de estudio en la presente Resolución, es por demás trascendente valorar también las circunstancias particulares del caso, con el objeto de acatar cabalmente el mandato constitucional de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la Constitución.

En efecto, como antes quedó dicho, al aplicar una norma jurídica abstracta a un caso concreto el juzgador está obligado a considerar todas las circunstancias que

concurrir en el particular, inclusive la conducta observada por el responsable con posterioridad a la comisión del ilícito, respecto a lo cual, resulta orientadora la Jurisprudencia que se cita enseguida:

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD RESPONSABLE.¹⁵² *Acorde con el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial es la encargada de imponer las penas, al ser la que valora las pruebas para acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado, quien mediante el ejercicio de la inmediación debe analizar los elementos descritos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que se refieren a las condiciones de realización del delito, las calidades de los sujetos activo y pasivo, la forma de intervención del sentenciado, la situación socioeconómica y cultural de éste, su comportamiento posterior al evento delictivo, así como las circunstancias en que se encontraba en su realización; todas esas condiciones deben percibirse por el juzgador de instancia, al ser quien tiene contacto directo con el desarrollo del proceso penal y no por el tribunal constitucional, el cual tiene como función salvaguardar derechos humanos y no verificar cuestiones de legalidad, en virtud de que su marco normativo para el ejercicio de sus facultades lo constituyen la Carta Magna, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito no debe sustituirse en la autoridad responsable, toda vez que no podría aplicar directamente los preceptos de la codificación penal indicada al no ser una tercera instancia, máxime que el tema del grado de culpabilidad del sentenciado y el cuántum de las penas no implica que la responsable se hubiese apartado de la razón y la sana lógica, no es una infracción a la interpretación de la ley, no es una omisión de valoración de la prueba y no consiste en la apreciación errónea de los hechos.*

Del modo tal que este *Consejo General* considera que la **actitud adoptada por el PRD no puede excluirlo de la responsabilidad en que incurrió** y, por el contrario, su actitud en cuanto a este procedimiento debe ser agravado, permitiendo modificar el criterio de sanción que se había venido sosteniendo, hacia un nivel superior de las sanciones previstas por la *LGIFE*, toda vez que dicha actitud redundaba en la vigencia del orden jurídico, en la protección al derecho de libre afiliación de los ciudadanos tutelada, incluso, por parte de las propias entidades de interés público, como lo es el sujeto denunciado y la prevalencia del Estado de Derecho.

Lo anterior se considera así, ya que, la afiliación del denunciante, si bien aconteció en dos mil diecinueve, temporalidad en la que se encontraba vigente el acuerdo INE/CG33/2019, por lo que debió de contar con la constancia que acreditara la

¹⁵² Consultable en la <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2014661&Clase=DetalleTesisBL>

voluntad de afiliarse, refrendar o ratificar su afiliación por parte del quejoso, lo que en el caso no ocurrió.

Ya que, como se indicó, por una parte el partido político no aportó alguna documental que acreditara la voluntad del quejoso de quererse afiliar a dicho partido político.

Esto es, no obstante que, en esa temporalidad *el PRD* tenía pleno conocimiento de las razones y motivos que dieron sustento al Acuerdo **INE/CG33/2019**, cuyo propósito central era que los partidos políticos realizaran una depuración de sus padrones de militantes, con el objeto de contar, **únicamente, con registros de afiliación sustentados con cédulas de afiliación**, en el modo tradicional o, en su caso, con el correspondiente registro electrónico, tratándose de la aplicación móvil, **lo cierto es que dicho instituto político realizó la baja hasta ser requerido por la UTCE, sin que se aprecie que se hubiere realizado una genuina revisión de los registros de militantes por dicho partido político.**

Lo que denota, como se precisó previamente, un actuar indebido por parte del PRD que evidentemente contraviene los fines y objetivos que debe observar una entidad de interés público, como lo son los partidos políticos, quienes, en términos de los artículos 41, de la *Constitución* y 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*, deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, respetando, entre otros, los derechos de los ciudadanos.

Por lo anterior, no obstante, lo establecido en el Acuerdo INE/CG33/2019 y los cumplimientos dados a dicho Acuerdo por parte del PRD, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto, este *Consejo General* considera necesario transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a juicio de este órgano electoral derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al PRD se justifica la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una MULTA, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

Bajo esta óptica, y tomando en consideración que la acreditación de la **acción** de haber afiliado sin su consentimiento al quejoso estuvo rodeada de circunstancias particulares, como lo fue la ausencia de la documentación de la que se desprenda su afiliación voluntaria y que lo siguiera conservando dentro de su padrón de militantes una vez transcurrido el periodo establecido por el Acuerdo INE/CG33/2019 (treinta y uno de enero de dos mil veinte); que la falta fue calificada como grave ordinaria; que se concluyó la existencia del dolo, y que **el partido ya sabía de su obligación de depurar sus padrones existentes y contar con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militantes.**

Por ello, esta autoridad considera adecuado, en el caso concreto, imponer una multa equivalente a **1,284** (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, vigente en el año de la conducta, **por la afiliación indebida**, sanción que se estima debe tomarse como base para el presente asunto, si se consideran las condiciones previamente descritas.

Sanción que también ha sido impuesta por este *Consejo General*, en los casos de reincidencia, como lo fue la identificada con la clave **INE/CG168/2021**.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa y las condiciones socioeconómicas del instituto político denunciado, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,¹⁵³ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.- *En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre*

¹⁵³ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

Así, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de la falta, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una **multa** equivalente a **1,284** (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, vigente en el año de la conducta, por haberse acreditado la reincidencia.

Lo anterior, conforme a lo que se señala a continuación:

Afiliación indebida de:	Multa por infracción acreditada	UMA vigente en 2019 ¹⁵⁴	Sanción a imponer
Manolo Diego Cantoriano	1,284 (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización	\$84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.)	\$108,485.16 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.).

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.**¹⁵⁵

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al **PRD** constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del PRD, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos

¹⁵⁴ Consulta en: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

¹⁵⁵ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/03246/2022 emitido por la *DEPPP*, se advierte que al PRD le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el mes de noviembre del año en curso, la cantidad de \$28,222,794.56 [veintiocho millones, doscientos veintidós mil, setecientos noventa y cuatro pesos 56/100]

Por lo anterior, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el infractor está en posibilidad de pagarla sin que se afecte su operación ordinaria, además de que la sanción es proporcional a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo que según ha establecido la Sala Superior del *Tribunal Electoral* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa el porcentaje de **0.38%**.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior del *Tribunal Electoral* en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—¹⁵⁶ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LG/PE*, las cantidades objeto de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del

¹⁵⁶ Consultable en la liga de internet:
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf.

financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el *PRD*, una vez que esta resolución haya quedado firme.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile, tratándose de partidos políticos, a través del **recurso de apelación** previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del **juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos** previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento, cuando se impugne por ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. No se acredita la infracción al derecho de libre afiliación en perjuicio de **Sandra Luz Iñiguez Cruz, Antonio Cervantes Corona, Jesús Librado Mora Rojas, Laura Lidia Monsalvo Loperena, Lorenzo Ríos Gómez, Yonathan Antolín López Pérez, Mariana Ivonne Vázquez Herrera, Rebeca Alejandra Cosío Estrada, Sara Catalán Landeros, Marisol Ramírez Gómez, Rosalba Sánchez Peña, Carlos Arturo de la Paz Manrique, Baltazar Lorenzo Valente, Melina Estrella Sánchez Zárate, Esmeralda Chávez Jaimes, Gloria Andrea Pérez Valdez, y Dulce Ariana Cohuo Chan**, por parte del **Partido de la Revolución Democrática**, en términos de lo establecido en el considerando CUARTO, numeral 7, apartado A, subapartado 1 de esta resolución.

SEGUNDO. No se acredita la infracción al derecho de libre afiliación en perjuicio de **Lorenzo Velasco López y Jaime Helios Carbajal Gutiérrez**, por parte del **Partido de la Revolución Democrática**, en términos de lo establecido en el considerando CUARTO, numeral 7, apartado A, subapartado 2 de esta resolución.

TERCERO. Se acredita la infracción al derecho de libre afiliación en perjuicio de **Manolo Diego Cantoriano**, por parte del **Partido de la Revolución**

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

Democrática, en términos de lo establecido en el considerando CUARTO, numeral 7, apartado B, de esta resolución.

CUARTO. Se impone una multa al **Partido de la Revolución Democrática**, en los términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución.

No.	Quejoso	Sanción a imponer
1	Manolo Diego Canoriano	1,284 [mil doscientos ochenta y cuatro] Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$108,485.16 [ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.] [Ciudadano afiliado en 2019]

QUINTO. En términos de lo establecido en el artículo 458, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al Partido de la Revolución Democrática será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su considerando SEXTO.

SEXTO. No se acredita la infracción consistente en el uso indebido de datos personales, derivado del ejercicio del derecho constitucional y legal del Partido de la Revolución Democrática de nombrar a **Marisol Ramírez Gómez** como su representante ante mesa directiva de casilla para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en términos de lo establecido en el considerando CUARTO, numeral 8, de esta resolución.

SÉPTIMO. Notifíquese personalmente a las personas denunciantes antes referidas.

Notifíquese al Partido de la Revolución Democrática, en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y por **estrados** a quienes resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/DACC/JD01/QROO/151/2020

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de objeción de pruebas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de la Consejera y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**